



Asamblea General

Distr. general
30 de abril de 2021
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias

Comunicaciones transmitidas, casos examinados, observaciones y otras actividades realizadas por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*

123^{er} período de sesiones** (15 a 19 de febrero de 2021)

I. Comunicaciones

1. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 19 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió 34 casos a la Arabia Saudita (4), el Camerún (2), China (1), Egipto (5), la India (1), la República Islámica del Irán (1), el Iraq (1), el Pakistán (11), Qatar (1), la República Unida de Tanzania (2), Turquía (1), Uzbekistán (3) y la República Bolivariana de Venezuela (1).
2. En su 123^{er} período de sesiones, celebrado del 15 al 19 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo decidió transmitir 205 nuevos casos denunciados de desaparición forzada al Afganistán (2), la Arabia Saudita (3), Bangladesh (2), Burundi (12), China (8), Egipto (5), los Emiratos Árabes Unidos (2), la Federación de Rusia (2), Irán (República Islámica del) (1), el Iraq (3), Myanmar (14), Nepal (1), el Pakistán (77), la República Árabe Siria (33), la República Popular Democrática de Corea (2), Sri Lanka (36) y el Yemen (1).
3. El Grupo de Trabajo también decidió transmitir 11 nuevos casos denunciados de vulneraciones equivalentes a actos de desaparición forzada supuestamente perpetrados por agentes no estatales en Libia (1) y el Yemen (10).
4. El Grupo de Trabajo dio por esclarecidos 51 casos en la Arabia Saudita (2), Belarús (1), el Camerún (1), Egipto (3), Filipinas (12), Libia (1), el Pakistán (29), la República Árabe Siria (1) y la República Bolivariana de Venezuela (1). Un total de 32 casos se dieron por esclarecidos sobre la base de la información proporcionada por los Gobiernos, y 19 sobre la base de la información facilitada por las fuentes.
5. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 19 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió 52 comunicaciones junto con otros mecanismos de procedimientos especiales. Las comunicaciones consistieron en tres cartas de intervención inmediata, dirigidas a la India (1), el Pakistán (1) y Sri Lanka (1); 12 llamamientos urgentes conjuntos dirigidos a Albania (1), Armenia (1), Azerbaiyán (1), el Camerún (1), Egipto (1), la Federación de Rusia (1), la República Islámica del Irán (2), el Iraq (1), Myanmar (1), Panamá (1) y Turquía (1); y 34 cartas de denuncia conjuntas dirigidas a Camboya (1), China (1), Colombia (1), las

* Los anexos del presente documento se reproducen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.

** En vista de las restricciones a los viajes impuestas por la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Grupo de Trabajo se reunió por videoconferencia.



Comoras (1), Côte d'Ivoire (1), Egipto (2), la Federación de Rusia (1), Indonesia (1), el Iraq (1), Madagascar (1), México (1), Myanmar (1), el Pakistán (1), el Paraguay (1), el Perú (2), la República Árabe Siria (2), la República Democrática del Congo (1), la República Democrática Popular Lao (2), la República Unida de Tanzania (2), Sri Lanka (1), Tailandia (1), Túnez (1), Turkmenistán (1), Ucrania (1), Uzbekistán (1), la República Bolivariana de Venezuela (1) y Viet Nam (1), y a "otros actores": (la Coalición Nacional de las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Sirias y las autoridades *de facto* de Saná) (2), así como tres "otras cartas" dirigidas a la Arabia Saudita (1) y México (2)¹

6. En su período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó y aprobó tres denuncias generales, relativas a Colombia, México y la República Árabe Siria (véase el anexo II). También celebró debates temáticos respecto de sus métodos de trabajo, de su próximo informe temático sobre las desapariciones forzadas que se producen en el contexto de los traslados extraterritoriales y de un comentario general previsto acerca del artículo 7 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

7. En el anexo IV figura la lista completa de las declaraciones y los comunicados de prensa emitidos por el Grupo de Trabajo durante el período que se examina.

II. Otras actividades

8. Durante su período de sesiones, el Grupo de Trabajo mantuvo reuniones virtuales con familiares de personas desaparecidas y con representantes de organizaciones no gubernamentales que se ocupaban de la cuestión.

9. Durante su período de sesiones, el Grupo de Trabajo también mantuvo reuniones con representantes de los Gobiernos de Argelia y el Japón y reuniones bilaterales oficiosas con representantes de otros Gobiernos.

10. El 19 de noviembre de 2020, durante el 67º período ordinario de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Grupo de Trabajo organizó, junto con la Comisión Africana y el Comité contra la Desaparición Forzada, un seminario web sobre la situación de la desaparición forzada en África.

11. En el anexo V figura una lista de otras actividades realizadas por el Grupo de Trabajo durante el período que se examina.

III. Información relativa a las desapariciones forzadas o involuntarias en los Estados examinados por el Grupo de Trabajo durante el período de sesiones

Afganistán

Procedimiento ordinario

12. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Un nacional de Afganistán presuntamente detenido por la policía en Ghazni el 2 de febrero de 2017;

¹ El Grupo de Trabajo transmite cartas de intervención inmediata en casos de intimidación, persecución o represalias contra familiares de personas desaparecidas, testigos o miembros de organizaciones relevantes. Además, las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado pueden ser objeto de cartas de denuncia; las violaciones de los derechos humanos en curso o potenciales pueden ser objeto de llamamientos urgentes; y las preocupaciones relacionadas con proyectos de ley, leyes, políticas y prácticas que no cumplen el derecho y las normas internacionales de derechos humanos se clasifican como "otras cartas". Todas estas comunicaciones se hacen públicas 60 días después de su transmisión al Estado, junto con las respuestas recibidas del Gobierno, y pueden consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

b) Un nacional de Afganistán presuntamente detenido por la policía en su domicilio de Kandahar el 1 de febrero de 2017.

Albania

Llamamiento urgente conjunto

13. El 30 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a un nacional de Turquía que, según se informó, se enfrentaba a un traslado inminente de Albania a Turquía, durante el cual correría el riesgo de ser objeto de una desaparición forzada.

Armenia

Llamamiento urgente conjunto

14. El 7 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo, entre otras cosas, a los casos de desaparición forzada durante el enfrentamiento armado en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj y sus alrededores. Se transmitió al Gobierno de Azerbaiyán una carta en la que se expresaban preocupaciones similares.

15. El 22 de febrero de 2021, el Gobierno respondió al llamamiento urgente.

Azerbaiyán

Llamamiento urgente conjunto

16. El 7 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo, entre otras cosas, a los casos de desaparición forzada durante el enfrentamiento armado en la zona de conflicto de Nagorno-Karabaj y sus alrededores. Se transmitió al Gobierno de Armenia una carta en la que se expresaban preocupaciones similares.

17. El 5 de enero de 2021, el Gobierno respondió al llamamiento urgente.

Bangladesh

Procedimiento ordinario

18. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Mohammad Murshidul Islam, presuntamente secuestrado en las calles de Taherpur el 19 de abril de 2017 por miembros del Batallón de Acción Rápida;

b) Abdul Kuddus Mohammad, presuntamente secuestrado en las calles de Baghmara el 6 de abril de 2017 por miembros del Batallón de Acción Rápida.

Belarús

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

19. Sobre la base de la información proporcionada por el Gobierno y otras fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Maria Kalesnikava que, según se informó, está recluida en la prisión núm. 8 de Minsk.

Burundi

Procedimiento ordinario

20. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 12 casos (véase el anexo I).

Camboya

Carta de denuncia conjunta

21. El 11 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada de un miembro de la oposición política tailandesa que había desaparecido en Camboya y a la presunta detención en Camboya, desaparición forzada y posterior deportación a Turquía de un nacional de México y Turquía. Se enviaron cartas similares a la República Democrática Popular Lao, Tailandia y Viet Nam, que incluían denuncias de que los Estados coordinaban, respaldaban o consentían las detenciones extraterritoriales en la región.

Camerún

Procedimiento de acción urgente

22. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno dos casos relativos a Ngo Ernest Mofa y Mokube Onyori, dos nacionales del Camerún secuestrados por agentes de la Seguridad Nacional el 4 de noviembre de 2020 frente al domicilio de este último.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

23. Sobre la base de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Njoka Kingsley Fomomyuy, al que se había aplicado anteriormente la norma de los seis meses. El Sr. Njoka está encarcelado en la prisión central de Kondengui, en Yaundé.

Llamamiento urgente conjunto

24. El 7 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a las denuncias de restricciones al derecho a la libertad de reunión pacífica y de uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones pacíficas del 22 de septiembre de 2020.

China

Procedimiento de acción urgente

25. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Chang Weiping, nacional de China presuntamente detenido en su domicilio el 22 de octubre de 2020 por fuerzas de la Oficina de Seguridad Pública de la ciudad de Baoji.

Procedimiento ordinario

26. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno ocho casos relativos a:

- a) Tenzin Choephel, presuntamente detenido por la policía en marzo de 2018 en el aeropuerto de Lhasa Gongkar;
- b) Abudukeremu Abudurousuli, nacional de China de etnia uigur presuntamente detenido por miembros de la policía local en mayo de 2017 en Kashi;

- c) Molidan Maimaiti, nacional china de etnia uigur presuntamente detenida por miembros de la policía local en mayo de 2017 en Kashi;
- d) Aikebaier Wushuer, nacional de China de etnia uigur presuntamente detenido por miembros de la policía local en mayo de 2017 en el condado de Wensu;
- e) Abulati Muairemu, nacional de China de etnia uigur presuntamente detenida por miembros de la policía local el 15 de abril de 2017 en Kshgar;
- f) Turepu Toheti, nacional de China de etnia uigur presuntamente detenido por miembros de la policía local a principios de 2017 en Arsilanbag;
- g) Rouziniyazi Turepu, nacional de China de etnia uigur presuntamente detenido por miembros de la policía local a principios de 2017 en Arsilanbag;
- h) Yuerniyazi, nacional de China de etnia uigur presuntamente detenida por miembros de la policía local a principios de 2016 en Arsilanbag.

Información facilitada por las fuentes

27. Las fuentes facilitaron información sobre cuatro casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Aplicación de la norma de los seis meses

28. El 14 de enero de 2021, Gobierno transmitió información sobre un caso pendiente, al que el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses². Según se informa, esa persona se encuentra en libertad.

Información facilitada por el Gobierno

29. El 14 de enero de 2021, el Gobierno de China transmitió información sobre 21 casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

30. El 5 de febrero de 2021, el Gobierno de Suecia transmitió información sobre un caso en China, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

31. El 4 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada de Chang Weiping, defensor de los derechos humanos y abogado, que estaba bajo “vigilancia residencial en un lugar designado”.

Observación

32. El Grupo de Trabajo sigue muy preocupado por el patrón de denuncias que está recibiendo sobre personas de etnia uigur que residen en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur. En particular denuncias que indican que algunas personas son encarceladas porque tienen familiares que viven en el extranjero o después de regresar ellas tras residir en el extranjero. El Grupo de Trabajo también ha recibido información alarmante que indica que algunas personas han sido encarceladas poco después de haber hecho videollamadas a familiares que residen en el extranjero. En consecuencia, las personas que residen en la Región Autónoma de Xinjiang Uigur temen ponerse en contacto con sus familiares que viven en el extranjero por temor a las represalias, y estos familiares a menudo se abstienen de establecer cualquier contacto o de intentar obtener información sobre sus parientes por temor a exponerlos al riesgo de ser encarcelados.

33. El Grupo de Trabajo también subraya que se debe proteger a las familias de los malos tratos o la intimidación (Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, art. 13).

² Para obtener información sobre la aplicación de la regla de los seis meses, véase el párrafo 25 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

34. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 19 de febrero de 2013, y a sus recordatorios posteriores.

Colombia

Carta de denuncia conjunta y respuestas

35. El 4 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la falta de investigaciones efectivas y de cooperación bilateral para tratar los casos de desapariciones que involucran, entre otros, a migrantes y trabajadores transfronterizos, por agentes armados no estatales, incluidos grupos armados organizados y grupos delictivos, en la zona cercana a la frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Se envió una carta similar a la República Bolivariana de Venezuela.

36. El 2 y el 25 de febrero de 2021, el Gobierno respondió a la carta de denuncia conjunta.

Denuncia general y respuesta

37. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre las presuntas dificultades que se oponían a la aplicación de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en Colombia. Envío al Gobierno una carta de denuncia general, que figura en el anexo II, centrada en la falta de investigaciones y reparaciones en relación con las presuntas violaciones de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, contra miembros de las comunidades campesinas de Recetor y Chámeza entre noviembre de 2002 y marzo de 2003.

38. El 14 de enero de 2021, el Gobierno respondió a la denuncia general transmitida por el Grupo de Trabajo el 17 de noviembre de 2020³. En su respuesta, el Gobierno señaló que las autoridades competentes habían realizado diversas diligencias de investigación para recuperar e identificar los restos humanos potencialmente enterrados en la zona de San Antonio, Antioquia. Debido al avanzado estado de descomposición de los restos, no habría sido conveniente enviar muestras biológicas para su cotejo genético. Al parecer, durante las investigaciones se consultó a organizaciones de la sociedad civil que representan a las víctimas de desapariciones forzadas.

Comoras

Carta de denuncia conjunta

39. El 14 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las violaciones de los derechos de Insa Mohamed, alias Bobocha, que presuntamente había sido objeto de un secuestro extraterritorial y había sido devuelto por la fuerza a las Comoras desde Madagascar (véase el párrafo 80 *infra*). El 18 de marzo de 2021 se emitió un comunicado de prensa en relación con esas denuncias.

Côte d'Ivoire

Carta de denuncia conjunta

40. El 25 de noviembre, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la detención arbitraria y la desaparición forzada de Edith Gbalet Pulcherie, Cyrille Bi Djehi, Gédéon Junior Gbaou, Aimé César Kouakou N'goran y Pascal Affi N'Guessan, así como a las restricciones indebidas del derecho de reunión pacífica.

³ A/HRC/WGEID/122/1, párr. 60 y anexo II.

República Popular Democrática de Corea

Procedimiento ordinario

41. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Dong-hyun Baek, nacional de la República de Corea presuntamente secuestrado el 20 de diciembre de 1967 por miembros de la marina de la República Popular Democrática de Corea en el Mar del Este mientras trabajaba a bordo del Nampoong-ho, una pequeña embarcación para la pesca de arrastre;

b) Eung-won Kim, nacional de la República de Corea presuntamente secuestrado el 2 de julio de 1968 por miembros de la marina de la República Popular Democrática de Corea en el Mar del Este mientras trabajaba a bordo del Geumyoong-ho, una pequeña embarcación para la pesca de arrastre.

42. De conformidad con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo dio traslado del expediente de esos casos al Gobierno de la República de Corea.

Observación

43. El Grupo de Trabajo sigue exhortando al Gobierno a que coopere de forma significativa y de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.

República Democrática del Congo

Carta de denuncia conjunta

44. El 14 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a los defensores de los derechos humanos Olivier Muhubiri y Christine Mugabo que, según se informa, han sido acosados, intimidados y amenazados y han sido objeto de represalias por su labor en materia de derechos humanos y por cooperar con las Naciones Unidas a este respecto.

Egipto

Procedimiento de acción urgente

45. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno ocho casos relativos a:

a) Hussein Mohamed Meshrif Mohamed Meshrif, nacional de Egipto visto por última vez el 10 de enero de 2021 mientras era interrogado en la sede del Organismo Nacional de Seguridad;

b) Adel Abdullah Wazeer Abdul al-Maqsood, nacional de Egipto detenido el 21 de enero de 2021 en su lugar de trabajo por agentes del Organismo Nacional de Seguridad;

c) Abdulaziz Gamal Metwally Ibrahim, nacional de Egipto trasladado el 18 de octubre de 2020 de la comisaría de El-Erbain, en Suez, a un lugar desconocido por agentes del Organismo Nacional de Seguridad;

d) Mostafa Farag, nacional de Egipto detenido el 11 de octubre de 2020 en su domicilio de la calle Adel Eman, junto a la calle Al-Munjid, en el barrio de Al-Kenisah, en Giza, por agentes del Organismo Nacional de Seguridad, agentes de policía y agentes de las fuerzas especiales;

e) Abdelfattah Soliman, nacional de Egipto detenido el 2 de septiembre de 2020 en la Oficina del Registro Civil de Al-Mansura, provincia de Dakahlia, y trasladado a un lugar desconocido por agentes del Organismo Nacional de Seguridad.

Procedimiento ordinario

46. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno cinco casos relativos a:

- a) Islam Ahmed, nacional de Egipto secuestrado el 20 de enero de 2020 en su domicilio por agentes del Organismo Nacional de Seguridad vestidos de civil;
- b) Omar Mohamed Sayed Ahmed Amin, nacional de Egipto secuestrado en la calle el 7 de junio de 2019 por miembros de las fuerzas de seguridad uniformados y vestidos de civil;
- c) Ahmed Salah Ahmed Mohamed, nacional de Egipto detenido el 8 de febrero de 2020 frente a su domicilio por miembros de las fuerzas de seguridad uniformados y vestidos de civil;
- d) Abdel Moneam Soleiman, nacional de Egipto detenido el 17 de octubre de 2020 por agentes de control de fronteras uniformados en la frontera terrestre entre Egipto y el Sudán;
- e) Hany Farag, nacional de Egipto secuestrado el 3 de septiembre de 2020 alrededor del mediodía por agentes del Organismo Nacional de Seguridad vestidos de civil.

Aplicación de la norma de los seis meses

47. El Gobierno facilitó información sobre cuya base el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses a 17 casos relativos a Mostafa Fouad Abdelawad, Sobhi Abdelhadi Abdelhakim, Amer Fadl Abdelnaim, Mohamed Abdessalam Ali Mohamed, Imad Atifi Hammam, Nasser Khayri Shahata al-Mahdi, Majdi Mohamed Ali Mohamed Farghali, Nasser Suleiman Yassin Abdenasser, Mohamed Ali Ramadan Salama, Maysara Mahmoud Fouad Abdelmoniem, Abdouallah Kilany Abdeljaber Abdelaal, Yahia Osama Yahia Abu Salama, Islam Mohamed Temsah Metwally, Ahmed Mohamed Mansi el-Sayed Salem, Hasan Gouda Mohamedain Gouda, Abdelfattah Farag Musa Soliman y Mostafa Salah Salihin Farag.

Información facilitada por el Gobierno

48. El 22 de octubre y los días 8, 9, 11 y 15 de diciembre de 2020, el Gobierno transmitió información sobre cuatro casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Esclarecimiento

49. Sobre la base de la información facilitada previamente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos tres casos. En todos los casos se indicó que las siguientes personas se encontraban recluidas: Abdulrahman Mohammd Ahmed Sayed, Kamal Nabil Mohammad Abdullah Fayad y Mussaab Mohammad Ismael Sarwi.

Suspensión

50. El Grupo de Trabajo decidió, excepcionalmente y con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 28 de sus métodos de trabajo, suspender⁴ el examen de 13 casos pendientes, relativos a Mamdouh al-Arabi Azhari Diab, Ibrahim Abdallah, Mohamed Abdelmohsen, Bahloul Ahmed, Nabil Mohamed Ali Hassan al-Batouji, Sayed Ali Hassan, Ahmed Chalkami, Mahmoud Ahmed Badawi Fayed, Khaled Mohamed, Atef Suleiman, Mohamed al-Aryan Salama Aouda, Mohamad Saad Abdo Turk y Hassan Ahmed Ashour. No obstante, los casos pueden reabrirse en cualquier momento.

⁴ Para obtener información sobre la suspensión de los casos, véase el párrafo 28 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo.

Cartas de denuncia conjuntas

51. El 25 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la detención y la presentación de cargos oficiales por terrorismo y delitos relacionados con la seguridad nacional contra los defensores de los derechos humanos Gasser Abdel Rakez, Karim Ennarah y Mohamed Basheer, en aparente represalia por una reunión sobre derechos humanos que habían celebrado con representantes de la comunidad diplomática bajo los auspicios de la organización no gubernamental Egyptian Initiative for Personal Rights.

52. El 21 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la denegación de atención médica adecuada y oportuna durante la reclusión que causó la muerte de Ibrahim Hassan AbdelGhany al-Batea, Magdy Taha Mohamed el-Qalawy y Tony Hasan Khalifa Farghal.

Observación

53. El Grupo de Trabajo observó, en varios casos, una discrepancia entre la información recibida en enero de 2020, que indicaba que no había rastro de la detención de las personas afectadas, y la información recibida en diciembre de 2020, que confirmaba su reclusión. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda los artículos 9, 10 y 12 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

El Salvador

Información facilitada por el Gobierno

54. El 28 de octubre de 2020, el Gobierno transmitió información sobre dos casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Honduras

Información facilitada por el Gobierno

55. El 8 de septiembre de 2020, el Gobierno transmitió información sobre 120 casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

India

Procedimiento de acción urgente

56. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Mohammad Ashraf Khan Sehrai, presuntamente secuestrado en su domicilio de Srinagar (Jammu y Cachemira) el 12 de julio de 2020 por personal del ejército indio y agentes paramilitares armados.

Información facilitada por las fuentes

57. Las fuentes facilitaron información sobre dos casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta de intervención inmediata

58. El 22 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de intervención inmediata relativa a las denuncias de intimidaciones, registros y confiscaciones cometidos durante las redadas realizadas por agentes de seguridad nacional en Jammu y Cachemira.

Indonesia

Carta de denuncia conjunta

59. El 1 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la presunta reclusión, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de Apinus Zanambani y Luther Zanambani por militares en Suagapa, Intan Jaya, Papúa.

República Islámica del Irán

Procedimiento de acción urgente

60. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Muhammad Adwaiy, nacional de la República Islámica del Irán perteneciente a la minoría kurda que presuntamente fue secuestrado el 9 de enero de 2021 en su lugar de residencia en la aldea de Selin, Avroman, por agentes del Ministerio de Inteligencia.

Procedimiento ordinario

61. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno un caso relativo a Albofatleh Foad, periodista iraní presuntamente detenido el 12 de agosto de 2020 en su residencia de Kooieh Ramazan, Fازه 2 Karmandi, calle 26, núm. 19, en Ahwaz, por agentes de los servicios de inteligencia iraníes.

Llamamientos urgentes conjuntos y respuestas

62. El 1 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con las ejecuciones inminentes de Heidar Ghorbani y Arsalan Khodkam, dos nacionales de la República Islámica del Irán pertenecientes a la minoría kurda, después de que ambos fueran condenados a muerte, el primero por *baghi* (rebelión armada contra el Estado) y el segundo por *moharebeh* (utilización de armas para atentar contra las vidas o los bienes de los ciudadanos y para infundir temor a la población).

63. El 24 de noviembre de 2020, el Gobierno respondió al llamamiento urgente indicando el fundamento jurídico por el que las dos personas habían sido condenadas y que el derecho a las debidas garantías procesales estaba garantizado para ambos hombres.

64. El 19 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la detención de al menos 110 personas de la minoría kurda presuntamente implicadas en diferentes formas de activismo de la sociedad civil. El Grupo de Trabajo expresó su preocupación por las informaciones que indicaban que 40 personas habían sido objeto de desaparición forzada.

Observación

65. El Grupo de Trabajo expresa su gran preocupación por las recientes informaciones que indican que al menos 40 nacionales de la República Islámica del Irán pertenecientes a la minoría kurda han sido objeto de desaparición forzada en las provincias de Alborz, Kermanshah, Kurdistán, Teherán y Azerbaiyán Occidental (véase el párrafo 64 *supra*). A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda los artículos 2, 3, 10 y 13 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

66. El Grupo de Trabajo deplora no haber recibido durante años respuesta alguna del Gobierno en relación con los casos transmitidos y espera recibir información pronto.

Iraq

Procedimiento ordinario

67. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno un caso relativo a Azad AbdulKarim Mohammad Ali, Salam al-Alaei y Saad al-Alaei.

Carta de denuncia conjuntas

68. El 9 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la presunta desaparición forzada del defensor de los derechos humanos Ali Jasib Hattab al-Holaijy.

69. El 27 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la presunta desaparición forzada y detención arbitraria del periodista y defensor de los derechos humanos Sherwan Amin Nao Sherwani.

República Democrática Popular Lao

Información facilitada por el Gobierno

70. El 6 de octubre de 2020, el Gobierno transmitió información sobre cuatro casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por las fuentes

71. Las fuentes facilitaron información sobre cuatro casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Cartas de denuncia conjuntas

72. El 11 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a cuatro activistas políticos tailandeses que presuntamente desaparecieron en la República Democrática Popular Lao y a la presunta desaparición forzada en Tailandia de un defensor de los derechos humanos de Lao. En la carta, el Grupo de Trabajo subrayó la falta de progresos en la búsqueda y la investigación respecto de esos casos. Se enviaron cartas similares a Camboya, Tailandia y Viet Nam, que incluían denuncias de que los Estados coordinaban, respaldaban o consentían las detenciones extraterritoriales en la región.

73. El 5 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la nueva información recibida sobre un defensor de los derechos humanos y presunta víctima de desaparición forzada desde 2012.

Observación

74. El Grupo de Trabajo expresa gran preocupación por la información recibida que indica que las personas relacionadas con las víctimas de desapariciones forzadas en la República Democrática Popular Lao no pueden denunciar esos casos de desapariciones forzadas a las autoridades locales debido a la persecución constante a la que se exponen y al presunto riesgo de represalias. El Grupo de Trabajo también subraya que se debe proteger a las familias de los malos tratos o la intimidación (Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, art. 13).

75. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 8 de abril de 2020, y a sus recordatorios posteriores.

Líbano

Información facilitada por el Gobierno

76. El 4 de diciembre de 2020, el Gobierno transmitió información sobre 12 casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Libia

Procedimiento ordinario

77. El Grupo de Trabajo anunció que, a partir de septiembre de 2019, comenzaría a documentar las vulneraciones que pudieran equivaler a actos de desaparición forzada perpetrados por agentes no estatales⁵. En consecuencia, durante su período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó uno de esos casos presuntamente perpetrado en la parte del territorio de Libia bajo control del Ejército Nacional Libio⁶. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno y al Ejército Nacional Libio una comunicación relativa a Sulayman Yaseen Sulayman Elmiqdad, ciudadano libio presuntamente secuestrado el 4 de agosto de 2019 en su domicilio por una milicia afiliada al Ejército Nacional Libio del General Khalifa Haftar.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

78. Sobre la base de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido un caso.

Información facilitada por las fuentes

79. Las fuentes facilitaron información sobre ocho casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos. Sobre la base de la nueva información recibida de una fuente, el Grupo de Trabajo decidió suspender la norma de los seis meses que había aplicado en el 122º período de sesiones al caso relativo a Majdi Faraj Hamad Salah al-Hawat.

Madagascar

Carta de denuncia conjunta

80. El 14 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a Insa Mohamed, alias Bobocha, que presuntamente había sido objeto de un secuestro extraterritorial por el Estado y había sido devuelto por la fuerza a las Comoras desde Madagascar (véase el párrafo 37 *supra*).

Maldivas

Información facilitada por el Gobierno

81. El 18 de enero de 2020, el Gobierno transmitió información sobre un caso, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Información facilitada por las fuentes

82. Las fuentes facilitaron información sobre ocho casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

⁵ A/HRC/42/40, párr. 94.

⁶ El Grupo de Trabajo subraya que los casos remitidos al Ejército Nacional Libio no implican en absoluto juicio alguno sobre la condición jurídica de territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades.

México

Información facilitada por el Gobierno

83. El 9 de diciembre de 2020, el Gobierno transmitió información sobre 357 casos, 44 de los cuales han sido tratados, pero la información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta de denuncia conjunta

84. El 1 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la reclusión y el inicio de una investigación penal, tras la participación en manifestaciones en Guanajuato, de familiares de personas desaparecidas, defensores de los derechos humanos y miembros de la organización A Tu Encuentro. La carta también se refería a un activista de la organización de la sociedad civil Guanajuato Despertó.

“Otras cartas” conjuntas y respuestas

85. El 9 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, “otra carta” relativa al acuerdo por el que se establece una fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de forma extraordinaria, regulada, controlada, subordinada y complementaria, que se publicó el 11 de mayo de 2020 y que debe permanecer vigente entre el 12 de mayo de 2020 y el 27 de marzo de 2024.

86. El 23 de octubre de 2020, el Gobierno respondió a la “otra carta”.

87. El 21 de enero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, “otra carta” relativa a un proyecto de decreto por el que se promulga la Ley de la Fiscalía General de la República y se deroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República vigente; el proyecto de decreto se publicó en la Gaceta del Senado el 7 de octubre de 2020. Se expresó la preocupación de que el proyecto de decreto, de ser aprobado, pudiera menoscabar el derecho a un recurso efectivo para las víctimas, especialmente defensores de los derechos humanos y migrantes, respecto de las violaciones del derecho a la verdad, la justicia y la reparación; el principio de independencia de la Fiscalía General; y la búsqueda de personas desaparecidas.

Denuncia general

88. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre las presuntas dificultades que se oponían a la aplicación de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en México. La denuncia general, contenida en el anexo II, se centra en las irregularidades en el tratamiento de los cadáveres no identificados por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Observación

89. El Grupo de Trabajo sigue preocupado por las denuncias anteriores que señalan que la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, aprobada el 17 de marzo de 2021 por el Senado, y las correspondientes modificaciones introducidas en diversas leyes relativas a las desapariciones forzadas, representa un importante retroceso de los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, obstaculiza las iniciativas conexas para poner fin a la impunidad y debilita la coordinación interinstitucional necesaria para hacer frente a estos problemas.

90. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda los artículos 13 y 19 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El Grupo de Trabajo también recuerda que deben establecerse mecanismos de rendición pública de cuentas y procedimientos en ese sentido en los que participen de forma activa las víctimas y

sus familiares, así como las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil⁷.

Myanmar

Procedimiento ordinario

91. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 14 casos relativos a:

- a) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente secuestrado en la aldea de Maung Gli Taung a principios de enero de 2017 por soldados pertenecientes al ejército de Myanmar (Tatmadaw);
- b) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente secuestrado el 20 de octubre de 2016 en la aldea de Kya Gaung Taung por soldados del Tatmadaw;
- c) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente secuestrado el 6 de septiembre de 2017 en la aldea Thay Kan Gwa Son por soldados del Tatmadaw;
- d) Una niña, miembro del grupo étnico rohinyá, presuntamente secuestrada el 30 de agosto de 2017 en la aldea de Wed Kyein por soldados del Tatmadaw;
- e) Un niño, miembro del grupo étnico rohinyá, presuntamente secuestrado el 20 de octubre de 2016 en la aldea de Yai Twin Kyun por soldados del Tatmadaw pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Gobierno;
- f) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente detenido el 13 de octubre de 2016 en la aldea de Kyet Yoe Pyin por soldados del Tatmadaw;
- g) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente secuestrado el 27 de agosto de 2017 en la aldea de Chut Pyin por soldados del Tatmadaw;
- h) Una niña, miembro del grupo étnico rohinyá, presuntamente secuestrada el 25 de agosto de 2017 en la aldea de Pan Kaing por un grupo de soldados del Tatmadaw;
- i) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente secuestrado el 2 de septiembre de 2017 en la aldea Ah Htet Nan Yar-Pyaing Taung por soldados del Tatmadaw;
- j) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente secuestrado el 26 de agosto de 2017 en la aldea Kyun Phauk Phyu Su por soldados del Tatmadaw;
- k) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente secuestrado el 26 de agosto de 2017 en la aldea Kyun Phauk Phyu Su por soldados del Tatmadaw;
- l) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente secuestrado el 27 de agosto de 2017 en la aldea de Pan Kaing por soldados del Tatmadaw;
- m) Un niño, miembro del grupo étnico rohinyá, presuntamente secuestrado el 27 de agosto de 2017 en la aldea de Pan Kaing por soldados del Tatmadaw;
- n) Un miembro del grupo étnico rohinyá presuntamente detenido en diciembre de 2016 en la aldea de Yai Khut Chaung Khwa por soldados del Tatmadaw.

Carta de denuncia conjunta

92. El 18 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre las presuntas violaciones del derecho de reunión pacífica, el cierre de Internet, los ataques indiscriminados y la detención arbitraria y desaparición forzada de periodistas, manifestantes y personalidades políticas después del golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021.

⁷ A/HRC/45/13/Add.3, párr. 73.

Llamamiento urgente conjunto

93. El 18 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a las denuncias de desaparición forzada, detención arbitraria y malos tratos respecto de un joven de 17 años y su padre, Serajul Mustafa, y la posterior muerte del Sr. Mustafa durante la reclusión. Según la información recibida estas detenciones guardaban relación con las operaciones iniciadas por las fuerzas de seguridad en el estado de Rakáin en septiembre y octubre de 2020.

Observación

94. El Grupo de Trabajo está profundamente alarmado por la toma del poder por el ejército y la destitución del gobierno civil en Myanmar, incluidas las denuncias de desapariciones forzadas de periodistas, manifestantes y personalidades políticas desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. El Grupo de Trabajo recuerda el artículo 7 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Insta a los militares a que restablezcan las instituciones democráticas y garanticen que todas las personas privadas de libertad por ejercer sus derechos humanos sean puestas en libertad de inmediato y no sufran ningún daño mientras estén privadas de libertad.

Nepal

Procedimiento ordinario

95. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno un caso relativo a Nandalal Chauhan, presuntamente detenido en Joganiya Chowk en febrero de 2006 por miembros del Ejército de Nepal.

Panamá

Llamamiento urgente conjunto y respuestas

96. El 10 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a las denuncias de privación de libertad y posible extradición a Turquía de Muaz Türkyılmaz, donde correría el riesgo de ser objeto de desaparición forzada y detención arbitraria. Se transmitió una copia del llamamiento urgente al Gobierno de Turquía.

97. El 8 de enero de 2021, el Gobierno de Panamá respondió al llamamiento urgente indicando los fundamentos jurídicos de la privación de libertad del Sr. Türkyılmaz y confirmó que Turquía había presentado una solicitud de extradición.

Pakistán

Procedimiento de acción urgente

98. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno 11 casos relativos a:

a) Muhib Ali Leghari, alias Muhib Azad Leghari, nacional del Pakistán presuntamente secuestrado por agentes de la policía pakistaní el 4 de septiembre de 2020 cerca de la aldea de Sahib Khan Chandio, en Haiderabad;

b) Ahmad Ullah, nacional del Pakistán presuntamente detenido por agentes del ejército pakistaní el 1 de enero de 2021 en su residencia de Spalga, Turi Khel, Distrito de Waziristán del Norte, Jaiber Pastunjuá;

c) Badshah Islam, nacional del Pakistán, defensor de los derechos humanos y activista del Pashtun Tahafuz Movement, presuntamente detenido por agentes del ejército pakistaní el 13 de enero de 2021 en su residencia de Datta Khel, Oficina de Correos de Speen Wam, Tehsil Speen Wam, Distrito de Waziristán del Norte, Jaiber Pastunjuá;

d) Taj Aman Ullah, nacional del Pakistán y estudiante presuntamente secuestrado por agentes del ejército pakistaní el 20 de septiembre de 2020 en Spalgal, Turi Khel, Oficina de Correos de Miran Shah, Tehsil Miran Shah, Distrito de Waziristán del Norte, Jaiber Pastunjuá;

e) Fayaz Hussain Shaikh, nacional del Pakistán y activista presuntamente detenido por agentes de policía el 8 de noviembre de 2020, aproximadamente a las 1.30 horas, en Jamshoro, frente a la Universidad de Medicina Liaqat en Latifabad, Haiderabad;

f) Amal Noor, nacional del Pakistán, presuntamente secuestrado por agentes del ejército y de los servicios secretos del Pakistán el 11 de diciembre de 2020 en Tehsil Tank, Distrito de Waziristán del Sur, Jaiber Pastunjuá;

g) Anwar Ullah, nacional del Pakistán presuntamente detenido por agentes del ejército pakistaní el 10 de diciembre de 2020 en su tienda de Aba Khel, Oficina de Correos, Tehsil Speen Wam, Distrito de Waziristán del Sur, Jaiber Pastunjuá;

h) Shah Hikmat, nacional del Pakistán, presuntamente secuestrado por agentes del ejército y de los servicios secretos del Pakistán el 7 de octubre de 2020 en su residencia de Zai Saidgal, Oficina de Correos de Data Khel, Tehsil Data Khel, Distrito de Waziristán del Norte, Jaiber Pastunjuá;

i) Waheed Ullah, nacional del Pakistán presuntamente secuestrado por agentes del ejército y de los servicios secretos del Pakistán el 20 de agosto de 2020, aproximadamente a las 4.00 horas, en su residencia de Pathan Kot Tank, Distrito de Waziristán del Sur, Jaiber Pastunjuá;

j) Yaqoob Khan, nacional del Pakistán presuntamente detenido por agentes del ejército pakistaní el 8 de diciembre de 2020 en un puesto de control en Saidagi Tehsil Miran Shah, Distrito de Waziristán del Norte, Jaiber Pastunjuá;

k) Naem Gul Khan, nacional del Pakistán, presuntamente detenido por el comandante de la unidad 195 del Cuerpo de Fronteras el 25 de diciembre de 2020 en un puesto de control en el Distrito de Waziristán del Sur, Jaiber Pastunjuá.

Procedimiento ordinario

99. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 77 casos (véase el anexo I).

Aplicación de la norma de los seis meses

100. El 6 de enero de 2021, el Gobierno transmitió información sobre 15 casos pendientes, a los que el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses.

Información facilitada por el Gobierno

101. El 6 de enero de 2021, el Gobierno transmitió información sobre 53 casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

102. Sobre la base de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 14 casos relativos a 11 personas que, según se informó, fueron puestas en libertad, 1 persona que, al parecer, falleció y 2 personas que, al parecer, estaban encarceladas.

Información facilitada por las fuentes

103. Las fuentes facilitaron información sobre dos casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Carta conjunta de intervención inmediata

104. El 21 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de intervención inmediata sobre la intimidación, las amenazas de represalia y el acoso continuos a los que se enfrentaban el defensor de los derechos humanos Fazal ur Rehman Afridi y algunos de sus familiares y asociados.

Cartas de denuncia conjuntas

105. El 23 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada del periodista y activista de derechos humanos Mudassar Mahmood, alias Naaru, y las amenazas y actos de intimidación contra personas relacionadas con él, así como a la presunta desaparición forzada por un breve período del periodista Matiullah Jan y los actos de intimidación recientes contra él.

Observación

106. El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por el número constantemente elevado de nuevas denuncias de desapariciones forzadas en el Pakistán, que revelan un patrón alarmante de desapariciones forzadas de personas pertenecientes a minorías, activistas políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos. El Grupo de Trabajo observa en particular que, a pesar del número alarmantemente alto de desapariciones forzadas al parecer llevadas a cabo con la participación directa de agentes del Estado, el Gobierno no ha adoptado medidas eficaces para evitar esta práctica. La falta de adopción de medidas y el entorno general de impunidad indican que se toleran las desapariciones forzadas.

107. El Grupo de Trabajo recuerda los artículos 2, 3, 7 y 10 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Paraguay

Carta de denuncia conjunta y respuestas

108. El 6 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la muerte de dos niñas argentinas en el Departamento de Concepción como resultado de una operación llevada a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta que podría haber implicado ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas por un breve período e incluso tortura, así como irregularidades relacionadas con los procedimientos de identificación y examen de las pruebas forenses por el Estado.

109. El 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2020, así como el 15 de enero de 2021, el Gobierno respondió a la carta de denuncia conjunta indicando las medidas forenses y legales adoptadas para investigar la presunta desaparición forzada y la muerte de las dos niñas.

Perú

Cartas de denuncia conjuntas

110. El 11 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la transferencia de tierras destinadas a la construcción del santuario de La Hoyada al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la ampliación del aeropuerto Coronel FAP Alfredo Mendívil Duarte.

111. El 24 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre incidentes de vandalismo que causaron graves daños al monumento a las víctimas de la violencia sufrida en el país entre 1980 y 2000, con el que se procura promover una cultura de paz y reconciliación y el respeto de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.

Filipinas

Esclarecimiento

112. Sobre la base de la información facilitada previamente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 12 casos. En relación con 11 de los casos, según se informa, las siguientes personas han sido puestas en libertad: Abdel Babao, Salvador Baddul, Martin Banggay, Rogelio Gammad, Leonor Guimmay, Francisco Gundan, Ronnie Manablug, Rodolfo Soriano, Juan Tappo, Rudy Laxxing y Rodrigo Manali. Además, según se informa, Tido Zumbaga ha fallecido.

Información facilitada por las fuentes

113. Sobre la base de la nueva información recibida de una fuente, el Grupo de Trabajo decidió suspender la norma de los seis meses que había aplicado en el 121^{er} período de sesiones a tres casos relativos a Larry Aparato, Andres Awid y Pablo Awid.

Qatar

Procedimiento de acción urgente

114. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Muneeb Ahmad Sofi, ciudadano indio presuntamente visto por última vez el 19 de octubre de 2020 en la comisaría de policía del centro comercial Safari.

Federación de Rusia

Procedimiento ordinario

115. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

- a) Aпти Ramzanovich Zaynalov, presuntamente secuestrado el 28 de junio de 2009 en una estación de servicio de Grozny por agentes del Estado;
- b) Mikhail Borchashvili, presuntamente secuestrado el 9 de marzo de 2006 en su apartamento de Grozny por agentes del Estado armados.

Aplicación de la norma de los seis meses

116. El 14 de enero de 2021 y el 8 de diciembre de 2020, respectivamente, el Gobierno de Ucrania y los representantes de la autoproclamada República Popular de Donetsk⁸ facilitaron información sobre un caso pendiente, al que el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses.

Información facilitada por el Gobierno

117. El 24 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021, el Gobierno transmitió información relativa a 47 casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por las fuentes

118. Las fuentes facilitaron información sobre 30 casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

⁸ El Grupo de Trabajo subraya que los casos remitidos a la autoproclamada República Popular de Donetsk no implican en absoluto juicio alguno sobre la condición jurídica de territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades.

Carta de denuncia conjunta

119. El 26 de enero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa al enjuiciamiento y encarcelamiento de Yuri Alexeevich Dmitriev, historiador y defensor de los derechos humanos que había investigado sobre las ejecuciones de ciudadanos soviéticos durante la Gran Purga y la ubicación de sus restos en Carelia.

Llamamiento urgente conjunto

120. El 17 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente relativo a la presunta detención arbitraria y desaparición forzada de Ismail Isaev y Salekh Magamadov.

Observación

121. En cuanto a los casos pendientes del Cáucaso Septentrional, el Grupo de Trabajo reitera que la conclusión o suspensión de una investigación penal relativa a una presunta desaparición forzada no exime al Gobierno de su obligación de buscar, localizar e identificar a la persona desaparecida o sus restos y restituirlos a los familiares, con el debido respeto a las costumbres culturales.

122. En relación con los casos pendientes de desaparición de coreanos de Sajalín, el Grupo de Trabajo pide que cualquier acuerdo bilateral con la República de Corea proteja el derecho a la verdad de los familiares de los desaparecidos, en particular en lo que respecta a concederles acceso a la información de archivo pertinente.

123. El Grupo de Trabajo espera que el Gobierno responda pronto de forma positiva a su solicitud de visita al país, transmitida el 2 de noviembre de 2006, y a sus recordatorios posteriores.

Arabia Saudita

Procedimiento de acción urgente

124. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno cuatro casos relativos a:

a) Abdulaziz Saeed Abdulla, nacional de Qatar y estudiante universitario de estudios islámicos, presuntamente interrogado por última vez el 24 de agosto de 2020 mientras se encontraba bajo la custodia del Estado en la prisión de Abha;

b) Salman bin Abdulaziz bin Salman Al-Saud, alias Salman Ghazalan, diplomático y académico;

c) Abdulaziz bin Salman bin Mohammed Al-Saud, padre de Salman bin Abdulaziz bin Salman Al-Saud, presuntamente trasladado de una villa perteneciente a las autoridades en Riad a un lugar desconocido por guardias de seguridad identificados como miembros de la Guardia Nacional, la Policía saudita y la Guardia Real, el 28 de noviembre de 2020;

d) Hussein Said Abdel-Fattah Abo al-Kheir, nacional de Jordania y conductor en Al-Tafila, Jordania, presuntamente visto por última vez el 24 de julio de 2020 mientras estaba recluido en la prisión de Tabouk.

Procedimiento ordinario

125. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno tres casos relativos a:

a) Mohammad Afzal, nacional del Pakistán y trabajador migrante presuntamente visto por última vez el 9 de abril de 2017 en la prisión de Briman;

b) Mohammed Imran, nacional de Pakistán y trabajador migrante presuntamente visto por última vez el 12 de septiembre de 2019 en la prisión de Briman;

c) Mouammar Kadhafi Nagy al-Qanawy, nacional de Egipto y conductor de maquinaria pesada presuntamente visto por última vez el 14 de enero de 2020 en la prisión de Tabouk.

Aplicación de la norma de los seis meses

126. El 23 de diciembre de 2020, Gobierno transmitió información sobre un caso pendiente, al que el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses.

Información facilitada por el Gobierno

127. El 7 de octubre de 2020 y el 14 de enero de 2021, el Gobierno transmitió información relativa a dos casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

128. Sobre la base de la información facilitada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido caso de Abdulaziz Saeed Abdulla.

“Otra carta” conjunta

129. El 17 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, “otra carta” relativa a las graves consecuencias de la Ley de Lucha contra los Delitos de Terrorismo y su Financiación de 2017, modificada el 19 de junio de 2020, en el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la Arabia Saudita.

Respuesta a una denuncia general

130. El 10 de agosto de 2020, el Gobierno respondió a la denuncia general transmitida por el Grupo de Trabajo el 12 de junio de 2020⁹. En su respuesta, el Gobierno declaró que las denuncias de que las normas y prácticas de investigación alentaban la práctica de la desaparición forzada eran infundadas. Se remitió a la legislación interna pertinente destinada a prevenir las desapariciones forzadas y la tortura y otras formas de maltrato de las personas privadas de libertad y a garantizar el debido proceso.

Serbia

Información facilitada por el Gobierno

131. El 26 de enero de 2021, el Gobierno transmitió información sobre un caso, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

España

Información facilitada por las fuentes

132. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Sri Lanka

Procedimiento ordinario

133. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 36 casos (véase el anexo I).

⁹ A/HRC/WGEID/121/1, párr. 112 y anexo I.

Carta de denuncia conjunta

134. El 9 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la presunta regresión respecto de las medidas de justicia de transición que Sri Lanka había adoptado o se había comprometido a aplicar para hacer frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante los 25 años de conflicto y sobre los obstáculos interpuestos a las iniciativas de preservación de la memoria dirigidos por grupos de víctimas y la intimidación de las víctimas y la sociedad civil.

Carta conjunta de intervención inmediata

135. El 6 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de intervención inmediata en relación con el presunto acoso policial y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes durante una reunión pacífica para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, celebrado el 30 de agosto de 2020 en los distritos de Jaffna y Batticaloa. La carta incluía información sobre presuntos actos de violencia y acoso contra un grupo de defensoras de los derechos humanos y miembros de la “Association of Relatives of the Enforced Disappeared North East”.

Observación

136. El Grupo de Trabajo se remite a la comunicación que emitió el 5 de febrero de 2021, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, en la que instaba a las autoridades de Sri Lanka a detener la regresión de los progresos realizados en los últimos años en la reconstrucción de las instituciones democráticas y a exigir la rendición de cuentas por los delitos cometidos en el pasado, la justicia para las víctimas y la reconciliación entre las comunidades.

137. A pesar del gran número de desapariciones forzadas que se han producido en Sri Lanka, las autoridades no han mostrado avances suficientes en la investigación de estos casos, la determinación del paradero o la suerte de las víctimas y la rendición de cuentas por los autores. Además, las declaraciones formuladas por el Gobierno, entre ellas las relativas a las medidas que se adoptarán para expedir certificados de defunción y realizar las “adaptaciones oportunas” en la Oficina de Personas Desaparecidas, han aumentado los temores de las familias con respecto al proceso que se seguirá para conocer el paradero y la suerte de sus familiares desaparecidos.

República Árabe Siria**Procedimiento ordinario**

138. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió 33 casos al Gobierno (véase el anexo I).

Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes

139. Sobre la base de la información facilitada previamente por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido un caso relativo a Rafat Abdel Rahman Khader Abu Nabhan que, según se informa, fue puesto en libertad.

Cartas de denuncia conjuntas

140. El 6 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la ausencia de negociaciones en el proceso político entre el Gobierno y la oposición sobre la formulación y aplicación de medidas de justicia de transición para hacer frente a las violaciones manifiestas del derecho internacional cometidas contra civiles desde marzo de 2011, así como sobre el hecho de que las víctimas no participen de forma significativa en el proceso. Una carta con denuncias similares fue transmitida conjuntamente a la Coalición Nacional de las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Sirias.

141. El 6 de enero de 2021, la Coalición Nacional de las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Sirias respondió a la carta de denuncia.

Observación

142. El Grupo de Trabajo está sumamente preocupado por un incidente denunciado durante el cual dos mujeres sirias y sus ocho hijos, todos menores de edad, fueron secuestrados por un grupo armado presuntamente afiliado a las fuerzas armadas sirias. Todavía no se conoce su paradero ni su suerte. El Grupo de Trabajo desea expresar su preocupación por la vulnerabilidad específica de los niños y las mujeres a las desapariciones forzadas, como se subraya en dos de sus observaciones generales¹⁰.

143. El Grupo de Trabajo reconoce que la Carta sobre la Verdad y la Justicia presentada por cinco asociaciones de familias sirias el 10 de febrero de 2021 se inspira en una visión amplia y basada en los derechos. La Carta pide una acción colectiva para que los autores rindan cuentas y se protejan los derechos de las víctimas y sus familiares a la verdad, la justicia, la reparación y la memoria.

Tailandia

Carta de denuncia conjunta

144. El 11 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a seis presuntos casos de activistas políticos tailandeses desaparecidos en el extranjero y en la que se expresaba la preocupación de que estos casos pudieran señalar una pauta de secuestros extraterritoriales que dieran lugar a desapariciones forzadas. La carta también hacía referencia a la presunta desaparición forzada en Tailandia de Od Sayavong, nacional de la República Democrática Popular Lao y defensor de los derechos humanos, y a la presunta desaparición forzada por un breve período de Truong Duy Nhat, nacional de Viet Nam y defensor de los derechos humanos, que posteriormente reapareció privado de libertad en Viet Nam. Se enviaron cartas similares a Camboya, la República Democrática Popular Lao y Viet Nam, que incluían denuncias de que los Estados coordinaban, respaldaban o consentían las detenciones extraterritoriales en la región.

Túnez

Carta de denuncia conjunta

145. El 8 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la falta de avances sustanciales en el proceso de justicia de transición descrito en las Leyes Orgánicas núm. 2013-53 y núm. 2014-17, en particular en el ámbito de las reparaciones y la rendición de cuentas, y sobre los intentos de invalidar la labor de la Comisión de la Verdad y la Dignidad y su legado en apoyo de la búsqueda de la verdad y la justicia por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado en Túnez.

Turquía

Procedimiento de acción urgente

146. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno un caso relativo a Huseyn Galip Kucukozigit, presuntamente secuestrado el 29 de diciembre de 2020 en Ankara por agentes de la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía y conducido a un lugar desconocido.

¹⁰ A/HRC/WGEID/98/1 y Corr.1 y A/HRC/WGEID/98/2.

Información facilitada por las fuentes

147. Las fuentes facilitaron información sobre ocho casos pendientes, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Información facilitada por el Gobierno

148. El 19 de enero de 2021, el Gobierno transmitió información relativa a cinco casos, pero esta se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

Llamamiento urgente conjunto

149. El 6 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con la presunta reclusión y desaparición forzada de Habib Chaab, nacional de Suecia y de la República Islámica del Irán, en Turquía, y con su posible traslado a la República Islámica del Irán.

150. El 5 de enero de 2021, el Gobierno respondió al llamamiento urgente.

Observaciones

151. El Grupo de Trabajo reitera que la conclusión o suspensión de una investigación penal relativa a una presunta desaparición forzada no exime al Gobierno de su obligación de buscar, localizar e identificar a la persona desaparecida o sus restos y restituirlos a los familiares, con el debido respeto a las costumbres culturales.

Turkmenistán**Carta de denuncia conjunta**

152. El 17 de febrero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a aparentes actos de represalia, que incluían presuntas acusaciones sin fundamento y acoso judicial contra un periodista independiente y, al parecer, su desaparición forzada.

Ucrania**Información facilitada por las fuentes**

153. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

154. El 11 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada de Rahmiddin Saparov y Alisher Haydarov, dos nacionales de Uzbekistán que se encontraban en Ucrania antes de ser devueltos por la fuerza, según se informa, a Uzbekistán.

155. El 5 de febrero de 2021, el Gobierno respondió a la carta de denuncia.

Emiratos Árabes Unidos**Procedimiento ordinario**

156. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Bashir Nasser Ali al-Marwalah, nacional del Yemen presuntamente visto por última vez en 2017 en un lugar desconocido de los Emiratos Árabes Unidos;

b) Adel Said al-Haj Ebeid, alias Abu al-Samah, nacional del Yemen presuntamente visto por última vez en febrero de 2018 en un edificio público en un lugar desconocido de los Emiratos Árabes Unidos.

Observación

157. El Grupo de Trabajo sigue preocupado por la presunta detención en régimen de incomunicación de Sheikha Latifa Mohammed al-Maktoum y por la nueva información recibida que indica que puede correr el riesgo de ser objeto de nuevas violaciones de sus derechos. A este respecto, el Grupo de Trabajo insta al Gobierno a que confirme la suerte de la Sra. Al-Maktoum y a que adopte medidas inmediatas para ofrecer garantías adecuadas en relación con su seguridad y bienestar.

República Unida de Tanzania

Procedimiento de acción urgente

158. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Said Rwsa, ciudadano burundés con condición de refugiado en la República Unida de Tanzania, detenido el 22 de julio de 2020 en el campamento de refugiados de Mtendeli por fuerzas policiales tanzanas uniformadas, y otro personal armado no identificado con uniforme, y conducido a un lugar no revelado;

b) Said Rwsa, ciudadano burundés con condición de refugiado en la República Unida de Tanzania, detenido el 22 de julio de 2020 en el campamento de refugiados de Mtendeli por fuerzas policiales tanzanas uniformadas, y otro personal armado no identificado con uniforme, y conducido a un lugar no revelado.

Cartas de denuncia conjuntas

159. El 18 de enero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre las persistentes y graves restricciones de las libertades fundamentales en la República Unida de Tanzania en el contexto de las elecciones de octubre de 2020.

160. El 25 de enero de 2021, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la desaparición forzada, la detención y reclusión arbitrarias, el maltrato o la tortura de refugiados de Burundi, y la posibilidad de que resulten muertos, en la República Unida de Tanzania.

Uzbekistán

Procedimiento de acción urgente

161. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno ocho casos relativos a:

a) Rahmiddin Saparov, presuntamente secuestrado el 19 de octubre de 2020 por agentes al parecer afiliados a los servicios de seguridad uzbekos cerca del centro de detención núm. 64 de Poltava, en Ucrania. Según la información recibida, posteriormente fue trasladado por la fuerza a Uzbekistán en coordinación con las fuerzas del orden ucranianas;

b) Alisher Haydarov, presuntamente detenido el 4 de octubre de 2020 cerca de la calle Privolnaya de Mykolayiv, Ucrania, por agentes no identificados al parecer afiliados al servicio de seguridad de Ucrania. Según la información recibida, posteriormente fue trasladado por la fuerza a Uzbekistán en coordinación con las fuerzas del orden ucranianas;

c) Gurbuz Sevilay, nacional de Turquía, presuntamente secuestrado el 28 de enero de 2021 en su apartamento de Taskent por cinco hombres al parecer afiliados a los servicios de inteligencia uzbekos.

162. De acuerdo con sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo decidió transmitir una copia de las comunicaciones relativas al Sr. Saporov y al Sr. Haydarov al Gobierno de Ucrania y una copia de la comunicación relativa al Sr. Sevilav al Gobierno de Turquía.

Carta de denuncia conjunta

163. El 11 de noviembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada del Sr. Saporov y el Sr. Haydarov.

Observación

164. El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por los informes sobre secuestros extraterritoriales y retornos forzosos de nacionales de Uzbekistán perpetrados con el pretexto de combatir el terrorismo y luchar contra el extremismo violento. El Grupo de Trabajo subraya que no reconocer la privación de libertad por agentes del Estado y negarse a reconocer la detención equivale a la perpetración de actos de desaparición forzada, aunque sean de corta duración. El Grupo de Trabajo también se remite al artículo 8 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Venezuela (República Bolivariana de)

Procedimiento de acción urgente

165. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno un caso relativo a Antonio José Sequea Torres, nacional de la República Bolivariana de Venezuela y capitán de la Guardia Nacional, que presuntamente desapareció el 27 de diciembre de 2020 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, después de que funcionarios del Servicio Nacional de Inteligencia lo hubieran detenido en Chuao, estado de Aragua, el 4 de mayo de 2020.

Información facilitada por la fuente

166. Las fuentes facilitaron información sobre un caso pendiente, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

167. El 4 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la falta de investigaciones efectivas y de cooperación bilateral para tratar los casos de desapariciones y ejecuciones extraterritoriales que involucran, entre otros, a migrantes y trabajadores transfronterizos, por agentes armados no estatales, incluidos grupos armados organizados y grupos delictivos, en la zona cercana a la frontera con Colombia. Se envió una carta similar a Colombia.

Viet Nam

Información facilitada por el Gobierno

168. El 16 de noviembre de 2020, el Gobierno transmitió información sobre un caso, pero esta se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

Carta de denuncia conjunta

169. El 11 de diciembre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta desaparición forzada de Siam Theerawut, nacional de Tailandia que al parecer fue detenido por las autoridades de Viet Nam en 2019, y a Truong Duy Nhat, nacional de Viet Nam y defensor de los derechos humanos, bloguero y periodista, que presuntamente fue detenido por agentes de policía tailandeses y devuelto a Viet Nam en 2019. La carta también hacía

referencia a las disposiciones legislativas de Viet Nam que permitirían la desaparición forzada y la detención en régimen de incomunicación. Se enviaron cartas similares a Camboya, la República Democrática Popular de Lao y Tailandia, en las que se denunciaba que los Estados coordinaban, respaldaban o consentían las detenciones extraterritoriales en la región.

Yemen

Procedimiento ordinario

170. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno un caso relativo a Tawfeeg al-Saba'i, presuntamente secuestrado el 26 de diciembre de 2019 por individuos armados al parecer afiliados al Gobierno en un puesto de control cerca de Al-Amri.

171. El Grupo de Trabajo anunció que, a partir de septiembre de 2019, comenzaría a documentar las vulneraciones que pudieran equivaler a actos de desaparición forzada perpetrados por agentes no estatales¹¹. En consecuencia, durante su 123^{er} período de sesiones, examinó cuatro casos equivalentes a desapariciones forzadas presuntamente perpetradas en el territorio controlado por las autoridades *de facto* de Saná¹². El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió a las autoridades *de facto* de Saná diez casos relativos a:

- a) Yaser al-Yunaid, presuntamente secuestrado el 20 de febrero de 2017 en la localidad de Al-Sada por individuos armados afiliados a las autoridades *de facto* de Saná;
- b) Fahmi al-Mariri, presuntamente secuestrado el 13 de marzo de 2016 por agentes afiliados a las autoridades *de facto* de Saná mientras conducía hacia la ciudad de Ibb;
- c) A'ateb Mahyoob, presuntamente secuestrado el 9 de noviembre de 2019 frente al hospital Al-Rifai, en la provincia de Huban, por agentes afiliados a las autoridades *de facto* de Saná;
- d) Abdo al-Buhairi, presuntamente secuestrado el 25 de enero de 2017 en Taiz (en la bifurcación de Al-Makha) por agentes vestidos de civil afiliados a las autoridades *de facto* de Saná;
- e) Najeeb al-Shuja, presuntamente secuestrado el 15 de marzo de 2016 en su domicilio en la zona de Al-Jahmalia durante una redada realizada por un agente presuntamente afiliado a las autoridades *de facto* de Saná;
- f) Khaled al-Sayaghi, presuntamente secuestrado el 4 de enero de 2016 en Taiz por cinco agentes afiliados a las autoridades *de facto* de Saná;
- g) Khalil al-Ashmi, presuntamente desaparecido en septiembre de 2017 de una prisión militar administrada por las autoridades *de facto* de Saná;
- h) Muhammed al-Sinwi, presuntamente secuestrado el 19 de agosto de 2015 en un puesto de control cerca de Bani Ali por individuos armados afiliados a las autoridades *de facto* de Saná;
- i) Majed al-Ghashami, presuntamente secuestrado el 18 de agosto de 2015 en Ibb, cuando viajaba hacia Marib, por agentes afiliados a las autoridades *de facto* de Saná;
- j) Muntaser al-Yusifí, presuntamente secuestrado el 8 de enero de 2015 en Hayya, cuando viajaba hacia la Arabia Saudita, por individuos armados afiliados a las autoridades *de facto* de Saná.

¹¹ A/HRC/42/40, párr. 94.

¹² El Grupo de Trabajo destaca que los casos remitidos a las autoridades *de facto* de Saná no implican en absoluto juicio alguno sobre el estatuto jurídico de territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades.

172. El 6 de octubre de 2020, el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia a las autoridades *de facto* de Saná en relación con las denuncias de arresto y detención arbitrarios, tortura e imposición de la pena de muerte como resultado de un juicio sin las debidas garantías respecto de diez periodistas yemeníes.

Annex I

Standard procedure cases

Burundi

1. The Working Group transmitted 12 cases to the Government, concerning:
 - (a) Armel Banteyakandi, a Burundian citizen, abducted on 8 September 2018 in front of his home by two policemen who came on-board a car with tinted windows. There were witnesses to this arrest;
 - (b) Mr. Jospin Keen Iradukunda, a Burundian national, arrested in February 2016 at Nyakabiga I, 10^{ème} avenue, in the commune of Mukaza, in the Bujumbura Mairie province, Burundi by agents of the Service National de Renseignement (SNR) wearing a uniform;
 - (c) Pierre Claver Habarugira, a Burundian citizen, abducted on 4 October 2015 from his home, by individuals in police uniforms;
 - (d) Elvis Irakoze, a Burundian national, arrested by policemen on 11 December 2015 at around 11pm in Kinanira, in a bar near his residence located close to the MUSALAC dispensary in Bujumbura Mairie;
 - (e) Mr. Ismaïl Bandushubwenge was last seen on 10 December 2015 in Bujumbura Mairie, Musaga area, 1^{ère} avenue;
 - (f) Jean Paul Nintunze, Burundian citizen, last seen on 5 July 2018, around 3 p.m. while training near the Gihofi camp (521st battalion) where he was a resident soldier;
 - (g) Nestor Ndayizeye, a Burundian citizen arrested on 20 December 2015 in the commune of Bugabira, Kirundo province, by agents of the National Intelligence Service (SNR) from Bujumbura acting under the authority of a colonel whose identity is known;
 - (h) Elie Bizimana, a Burundian citizen arrested on 4 March 2020 on Tenga-Gahwama Hill, Rubrizi area, Mutimbuzi Commune, Bujumbura Rural Province, Burundi, by the head of the Service National de Renseignement (SNR) in Mutimbuzi Commune;
 - (i) Isaïe Batumunwa, a Burundian citizen abducted on 22 July 2019 at 7 am on his way to the Nyeshenza market, by agents of the National Intelligence Service (SNR) in military and civilian dress;
 - (j) Jean Claude Hakizimana, a Burundian citizen, in village IV, arrested on 26 February 2020, at around 8 p.m., in the commune of Gihanga, by the Chief of Imbonerakure of the commune of Gihanga, whose identity is known;
 - (k) Egide Mpawenimana, a Burundian citizen abducted on 9 July 2019 near the bridge over the Rusizi River in the commune of Mutimbuzi, by the head of the National Intelligence Service (SNR) of the commune of Mutimbuzi, whose identity is known;
 - (l) Jérémie Ndayitwayeko, a Burundian citizen arrested on 13 May 2019 around 12 p.m. on the hill of Muyange by the head of the National Intelligence Service of the province of Bujumbura rural, accompanied by the head of the SNR of the commune of Mutimbuzi, whose identities are known.

Pakistan

2. The Working Group transmitted 77 cases to the Government, concerning:
 - (a) Muhammad Amir, a Pakistani national, allegedly arrested in January 2004 in Tehsil Samandri, District Faisalabad, by agents of the Inter-Services Intelligence (ISI);

- (b) Muhammad Niaz, a Pakistani national, allegedly abducted on 9 April 2014 from his place of residence in Madina Colony, District D.I. Khan, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Military Intelligence (MI);
- (c) Doda, a Pakistani national, allegedly arrested on 4 September 2019 at his place of residence in Pidrak, district Kech, Balochistan, by Frontier Corps personnel;
- (d) Usman, a Pakistani national, allegedly abducted on 4 September 2019 from Pidrak by agents of the Military Intelligence (MI), Frontier Corps and the Pakistani police;
- (e) Sikandar Malik, a Pakistani national, allegedly abducted on 9 December 2015 at 11:55 p.m. from his place of residence in Marrar Chack No. 42/R.B Tehsil Sangla Hill, District Nankana Sahib, Punjab by four to five individuals believed to belong to the Pakistani police;
- (f) Nasruddin, a Pakistani national, allegedly abducted on 24 August 2013 at Chaman Bazar Killa Abdullah by members of a secret agency, possibly by the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (g) Raees Khan, a Pakistani national, allegedly abducted on 2 September 2012 from Shinwari, Tapa Khoga Khel, Teshil & P.O Landi Kotal, District Khyber, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (h) Ali Haider Shah, a Pakistani national, allegedly abducted on 7 September 2018 in Gulzair Quaid, Islamabad, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (i) Bakhat Shah Zeb, a Pakistani national, was allegedly abducted on 29 April 2020 in front of Adiala Jail in Rawalpindi by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (j) Noor Zada, a Pakistani national, allegedly abducted on 6 June 2014 from his place of residence in Sirwaki Spain Kai, South Waziristan, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (k) Saaz Khan, a Pakistani national, allegedly abducted in May 2012 in Linda Bazar Haji Camp near the railway station of Lahore by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (l) Suleman Farooq Chaudhri, a Pakistani national, allegedly abducted on 4 October 2019 from Bahria town phase 3 Rawalpindi by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (m) Qari Muhammad Yaseen, a Pakistani national, allegedly abducted on 14 November 2015 from the Madrasa Khalid bin Walid Farooq Azam Mor Abbottabad by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (n) Waseem Ahmed, a Pakistani national, allegedly abducted on 26 July 2019 from his place of residence in Choti PO Khas District Attock by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);
- (o) Muhammad Talha, a Pakistani national, allegedly abducted on 10 July 2020 from his house on 1084 street no 2 Transfarmer Chok Servise Road Sadqa Abad Rawalpindi, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(p) Yaar Muhammad, a Pakistani national, allegedly abducted on 19 February 2014 at 5:00 p.m. from his place of residence in Mohmand Agency by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(q) Muhammad Azeem, a Pakistani national, allegedly arrested on 22 September 2019 near his residence in Gulistan e Johar, Karachi, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(r) Abdul Shakoor, a Pakistani national, allegedly abducted on 9 November 2017 from his place of residence in Post Office Sheikh Umar Tehsil Kot Addu District Muzaffargarh by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(s) Hazab Ullah Qambrani, a Pakistani national, a university student, allegedly abducted on 14 February 2020 from Main Road Qambrani, Quetta, Balochistan, by members of Pakistani security forces dressed in plain clothes and believed to be state agents;

(t) Din Minhaj Ud, a Pakistani national, allegedly abducted on 19 April 2013 from Sherpao Colony, near Allah Wali Mosque on Street no 2, house no 373 in Karachi by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence or the Secret Services;

(u) Irshad Ahmad, a Pakistani national, allegedly abducted on 5 June 2016 in Razmak, District Debra Ismail Khan, Khyber Pakhtunkhwa by members of a secret agency, allegedly by the Pakistani Military Services;

(v) Israr Mohammad, a Pakistani national, allegedly arrested on 2 July 2013 at a check post of the Pakistani Army in Ashari Ghatt, District Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa by members of the Pakistani Military Secret Services;

(w) Mahmood Mudassar, a Pakistani national and journalist in Faisalabad, allegedly abducted on 20 August 2018 in Kamal Bun (about 4 km ahead of Mahandri and 10 km before Kaghan, Province KPK) by individuals believed to be members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI);

(x) Zia Ur Rehman, an Afghan national, allegedly abducted on 7 November 2019 near Masjid Rajgan in Odhar Wal, District Chakwal, Punjab by members of a secret agency, possibly by members of the Pakistani Military and State Secret Services;

(y) Khalid Khan, a Pakistani national, allegedly abducted on 28 October 2010 in Kohat Tunnel, near Tribe Zarghun Khel, Meri Khel, Post Office Darra Adam, District Kohat, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the National Army;

(z) Suhail Raza Bhatti, a Pakistani national, human rights activist, allegedly arrested on 17 September 2015 at the Government Boys Degree College Shahdadkot, District Kamber Shahdadkot, Sindh, by agents of the Pakistani Police, the Pakistan Rangers (Sindh), the Inter-Services Intelligence and the Military Intelligence;

(aa) Abdul Baqi, a Pakistani national, allegedly abducted on 5 April 2012 at Shabroz Hotel, Prince Road, Quetta District, Balochistan, by agents of the Pakistani Military and the Secret services;

(bb) Gulab Khan, a Pakistani national, allegedly abducted on 12 September 2011 in Shaktoi, District South Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani Military;

(cc) Shafiq Mohammad, a Pakistani national, allegedly abducted on 9 January 2015 from Karachi, Sindh, by agents of the Pakistan Military and Secret Services;

(dd) Umar Daraz, a Pakistani national, allegedly abducted on 15 November 2012 in Shaktoi, District South Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by unidentified officers in civilian clothes believed to belong to the Pakistani Military and Secret Services;

(ee) Farman Ullah, a Pakistani national, allegedly arrested on 17 July 2020 at his place of residence in Kotka Abbas Khan Bhitani, Post Office Tajori Rasool Khel Kallay, District Lakki Marwat, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani Military and secret services believed to belong to a check post named Mali Khel Jani Khel;

(ff) Sadaqat Khan, a Pakistani national, allegedly arrested on 2 May 2013 at his place of residence in Yaka Toot, Chan Agha Colony, District Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani Army and Military Secret Services dressed in plain clothes;

(gg) Sarfaraz, a Pakistani national, allegedly abducted in 2014 from Karachi Airport by members of a Secret Agency officers, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(hh) Haq Nawaz, a Pakistani national, allegedly abducted on 25 February from his workplace in Shewa Ada Pul Distt Swabi by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter- services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(ii) Adil Anwar, a Pakistani national, allegedly abducted in 2009 from the village of Barabandi, Swat, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(jj) Ijaaz, a Pakistani national, allegedly abducted in 2012 from Chinar Colony, Mingora Swat, by members of a secret agency, possibly from the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(kk) Imran Mohammad, a Pakistani national, allegedly abducted on 25 July 2020 from his workplace, a pharmacy located in Bilal Colony, North Nazim Abad, district Karachi Central, Sindh, by agents of the Pakistani military and secret services;

(ll) Bakht Zaman, a Pakistani national, allegedly abducted on 25 August 2009 from his shop in Faiz Abad, Post Office Faiz Abad, Saidu Sharif, District Swat, Khyber Pakhtunkhwa, by an officer belonging to the Pakistani police;

(mm) Zafran Ullah, a Pakistani national, allegedly abducted on 21 November 2020 from Asmoon Khel Post Office, Tehsil Spin Wam, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa by agents of the Pakistani military;

(nn) Waqar Ahmad, a Pakistani national, allegedly abducted on 14 May 2020 from Post Office Mubarak Shahi, Tehsil Mir Ali, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa by agents of the Pakistani military;

(oo) Rizwan a Pakistani national, allegedly abducted on 2 April 2015 at 3:30 a.m., from his place of residence at Bilal Colony Clifton, District South Karachi, Sindh, by agents of the Military Intelligence Services and the Pakistani police;

(pp) Alamgir, a Pakistani national, allegedly abducted on 24 August 2012 from his place of residence in Nawela Area, Tehsil Parawah, District D.I Khan, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani Military Secret Services;

(qq) Abid Ullah, a Pakistani national, allegedly abducted on 21 June 2014 from a military checkpost named Khudi near Mir Khun Khel, Turi Khel, Post Office Miranshah, Tehsil Miranshah, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani Military Services;

(rr) Hazrat Ullah, a Pakistani national, allegedly abducted on 21 March 2021 from a Sohrab Gott, District Karachi, Sindh, by agents of Pakistani Military rangers;

(ss) Abid Rahman, a Pakistani national, allegedly arrested on 2 September 2019 at Misbah Block Factory, Khaisoor Road Moski, Mir Ali, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani military;

(tt) Gul Rahman, a Pakistani national, allegedly abducted on 28 August 2020 from Wali Noor checkpost of Pakistani Army, Post Office Jani Khel, Tehsil Bannu, District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa by agents of the Pakistani military;

(uu) Shahid Noor, a Pakistani national, allegedly abducted on 13 September 2018 from his place of residence at Wali Noor Post Office Jani Khel Mushtarka, Tehsil & District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa, by members of the Pakistani Military;

(vv) Abdul Majeed Baloch, a Pakistani national, allegedly abducted on 30 July 2020 from a factory in Ibrahim Hyderi Mills, Karachi by at least 10 individuals believed to belong to the Pakistani police;

(ww) Syed Naeem Akhtar Shah, a Pakistani national, allegedly abducted on 23 July 2016, at approximately 5:30 p.m., by individuals believed to belong to the Pakistani police while traveling from Hub, Balochistan, to Karachi, Sindh;

(xx) Dodo Khan Chandio, a Pakistani national, allegedly abducted on 26 June 2020 from a taxi stand in Khanpur Junjo near K. N. Shah, District Dadu by members of the Pakistani police;

(yy) Shahzad Ali Sher Manglo, a Pakistani national, a political activist, allegedly abducted on 17 June 2020 near an electric pole and a water pump on the main road of Gulshan-e- Hadeed Phase 2, Karahi, Sindh. It is believed that the perpetrators of Mr Manglo's abduction were state agents due to his affiliation to the JSSM political separatist party.

(zz) Jawed Noor, a Pakistani national, allegedly abducted on 20 January 2016 from Bannu Township, District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa by the Pakistani Military Secret Services dressed in plain clothes;

(aaa) Umar Hayat Khan, a Pakistani national, allegedly abducted on 21 November 2017 from Khwaza Khela, District Swat, Khyber Pakhtunkhwa by agents of the Pakistani military;

(bbb) Arif Ullah, a Pakistani national, allegedly arrested on 28 November 2017 at his place of residence in Wazir Memlion Khel, Bachki, Jani Khel, District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani army;

(ccc) Amin, a Pakistani national, allegedly arrested on 15 May 2019 at his residence in Drazinda, Post Office Shewa, Miami Kabul Khel, Tehsil Shewa, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa by agents of the Pakistani army;

(ddd) Ullah Ikram, a Pakistani national, allegedly arrested on 22 October 2014 at his residence in Chagh Malai, Post Office and Tehsil Sarokai, District South Waziristan by agents of the Pakistani Military Intelligence (MI);

(eee) Muhammad Saleem, a Pakistani national, allegedly arrested on 23 November 2014 at Sadar Bazar, District Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani army during a general search and control operation;

(fff) Saad Abdul, a Pakistani national, allegedly abducted on 27 February 2013 from his house in House No-700, Block No-D, Mohallah North Nazim Abad, Tehsil and District Central Karachi, Sind, by agents of the Pakistani Army and Secret Services;

(ggg) Aman Ullah, an Afghan national, allegedly abducted on 1 January 2016 from Karkhano Market, district Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, by agents of the Pakistani Army and Military Services.

(hhh) Asif Khan, a Pakistani national, allegedly abducted on 11 February 2010 from Khair Pur, District Sukkur, Sindh, by Pakistani Military and Secret Services;

(iii) Asif Nawaz, a Pakistani national, allegedly abducted on 3 October 2020 from his place of residence in Mir Ali Tehsil, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani Military;

(jjj) Aziz Ullah, a Pakistani national, allegedly abducted on 14 September 2011 from District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani Military;

(kkk) Habib Salam, a Pakistani national, allegedly abducted on 1 September 2017 from Tarnol Area, District Rawalpindi, Punjab, by unidentified individuals believed to belong to the Pakistani military;

(lll) Izhar Ahmad, a Pakistani national, allegedly abducted on 18 April 2016 from the business of a person associated with him located in District Bajaur, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani military;

(mmm) Wali Khan, a Pakistani national, allegedly arrested on 25 June 2020 at Ghor E Wala, District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani army and of the Counter- Terrorism Department of Ghor E Wala, District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa;

(nnn) Naqeeb Ullah, a Pakistani national, allegedly arrested on 2 January 2016 at his village Khedi Post Office Eifak, Mir Ali Tehsil by agents of the Pakistani army;

(ooo) Nawab Khan, a Pakistani national, allegedly arrested on 21 January 2014 at Narwabu, Tehsil Salarzai, District Bajaur, Khyber Pakhtunkhwa by agents of the Pakistani army;

(ppp) Said Muhammad, a Pakistani national, allegedly arrested on 29 August 2020 at Draban Road, Mandi Chowk, District Derra Ismail Khan, Khyber Pakhtunkhwa, by agents of the Pakistani army and Pakistani secret services;

(qqq) Sana Ullah, a Pakistani national, allegedly abducted on 1 September 2011 from Masque Kanghar Bisti Number Daar, Baqa Pur P/O Hatiji Tehsil by members of a secret agency, possibly by the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(rrr) Muhammad Anas, a Pakistani national, allegedly abducted on 13 May 2020 from Mohala Layqat Abad Number 2 Faisalabad by members of a secret agency, possibly by the Military Intelligence (MI), the Inter- services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(sss) Faqeer Muhammad, a Pakistani national, allegedly arrested on 14 August 2020 at Safoora Chowrangi Karachi Sindh by members of a secret agency, possibly by the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(ttt) Sheir Rehman, a Pakistani national, allegedly abducted on 2 October 2020 from his place of residence in Servise Road Near Moter Way Church Interchange Village Bahbudi by members of a secret agency, possibly by the Military Intelligence (MI), the Inter-services Intelligence (ISI) or the Central Intelligence Agency (CIA);

(uuu) Naimat Ullah Khan, a Pakistani national, allegedly abducted on 2 November 2013 from district Khand Yaro, Sindh, by agents of a Pakistani military secret service dressed in plain clothes;

(vvv) Umar Sadiq, a Pakistani national, allegedly arrested on 14 July 2019 at the Khwaja Khar Check-Post near Gar Baz, Post Office Bakaka Khel, Baka Khel Wazir by agents of the Pakistani military;

(www) Zahoor Ahmad, a Pakistani national, allegedly arrested on 22 May 2017 in Malak Din Khel by agents of the Pakistani military;

(xxx) Noor Zalam, a Pakistani national, allegedly arrested on 9 February 2020 at Loralai District of Balochistan, by agents of the Pakistani military secret services;

(yyy) Bakht Shah Zeb, a Pakistani national, allegedly abducted at approximately 5 p.m. on 29 April 2020 in front of Adyala prison, District Rawalpindi, Punjab, by 12 to 13 agents of a Pakistani secret agency, dressed in plain clothes.

3. In accordance with its methods of work, the Working Group transmitted a copy of the cases of Mr. Zia Ur Rehman and Mr. Aman Ullah to the Government of Afghanistan.

Sri Lanka

4. The Working Group transmitted 36 cases to the Government, concerning:

(a) A minor boy, allegedly disappeared on 8 December 1992 in Thalavai, Pangudaweli, Batticaloa District. It is believed that he was abducted by the Sri Lankan Army;

(b) Ravindran Kannamuthu, allegedly arrested on 24 September 1992 and taken to the Komandurai Army Camp, by the Sri Lankan Army;

- (c) Sundaresan Saundaranayagam, allegedly abducted on 24 September 1993 from a paddy field in Eachatheevu, Vavunatheevu, Batticaloa District, by the Sri Lankan Army;
- (d) Karunaharan Sinnathambi, allegedly detained on 15 March 1985 in a paddy field in Karavetti, Batticaloa District, by the Sri Lankan Army;
- (e) Kandasamy Sinnathurai, allegedly disappeared on 10 May 1985. It is believed he was abducted by the Sri Lankan Army;
- (f) Kanaharatnam Supaiya, allegedly disappeared on 4 June 1993 in Chenkaladi, Batticaloa District. It is believed that he was abducted by the Sri Lankan Army;
- (g) A minor girl allegedly disappeared on 1 February 1993 in Chenkaladi, Batticaloa District. It is believed that she was abducted by the Sri Lankan Army;
- (h) Thuraisingam Thurasamy, allegedly disappeared on 30 June 1992 in Nelupodiyarukal, Pangudaweli, Batticaloa District. He was allegedly abducted by the Sri Lankan Army;
- (i) Mohan Vadivelu, allegedly disappeared on 8 December 1992 in Pangudaweli, Batticaloa District. It is believed that he was abducted by the Sri Lankan Army;
- (j) A minor girl, allegedly disappeared on 22 July 1996 in Pangudaweli, Batticaloa District. It is believed that she was abducted by Sri Lankan Army;
- (k) Balasingham Vavithurai, allegedly disappeared on 3 September 1991 after going to the hospital in Chenkaladi, Batticaloa District. It is believed he may have been abducted by the Sri Lankan Army;
- (l) Pelpola Loku Liyanage Alwis, allegedly abducted in mid-1989 from Colombo, by the Sri Lanka Army;
- (m) Upasena Dholamulage, allegedly abducted from a house in Thelikada Kosthuwa, Galle, Sri Lanka on 6 September 1989, by the Sri Lanka Army;
- (n) Nandhasiri Eshwara Kanganamge, allegedly abducted from an unknown location in Vadhuraba, Galle, on 13 November 1988, by the Sri Lanka Army;
- (o) Jagath Sithi Hatuwage, allegedly abducted in 1989 from Hikaduwa, Galle, by the Sri Lanka Army;
- (p) Lawrance Francis, allegedly abducted on 21 April 1992 while fishing and navigating in direction of Jaffna, by members of the Mandaithivu Sri Lankan Navy;
- (q) Weerasena Welalagoda Korale allegedly arrested on 3 March 1990 from his home in Hadhuganava, Galle, by the Sri Lanka Army;
- (r) Anuraj Anandanadarajah, allegedly arrested on 15 May 2009 at the Omanthai checkpost, by the Sri Lankan army;
- (s) Gunatheepan Gunasekaram, allegedly arrested in Kilinochchi on 3 January 2007, by the Sri Lankan Army;
- (t) Krishnarajah Kanthasamy, allegedly arrested when traveling from Kilinochchi to Batticaloa, on 20 January 2007, by the Sri Lankan Army;
- (u) Kajendran Arumairajah, allegedly last seen in May 2009, while surrendering to the Army during a roundup by the Military Division of Mathalan in Puthukkudiyiruppu;
- (v) Shantharuban Sathananthan, allegedly arrested in Eluvaitivu, Jaffna District, on 20 November 2008, by the Sri Lankan Army;
- (w) Maheswary Kumarasamy, allegedly arrested on 15 May 2009 at the Omanthai check post, by the Sri Lankan Army;
- (x) Jesupatham Jegatheepan, allegedly abducted on 18 November 2008, during the siege of Visvamadu, in the Kilinochchi district, by the Sri Lankan Army;
- (y) Wakeesan Kanthasamy, allegedly disappeared on 19 April 2009 in Pokkanai, Northern Province. It is alleged that he was abducted by the Sri Lankan Army;

- (z) Senthoran Kanapathy, allegedly disappeared on 19 April 2009. It is alleged that he was abducted by the Sri Lankan Army;
- (aa) Athinesarasa Arunasalam, allegedly arrested on 17 March 1987, in Koomancholai, Batticaloa District, by the Sri Lanka Police's Special Task Force;
- (bb) Ravichandran Naharasi, allegedly disappeared on 27 May 1996 in Muthiraiyadi, Pankudaveli, Batticaloa District. It is believed that he was abducted by the Sri Lankan army;
- (cc) Sureswaran Poobalpillai, a Sri Lankan, allegedly disappeared on 23 July 2000 in Chenkaladi, Batticaloa District. It is believed he was abducted by the Sri Lankan Army;
- (dd) Sathiyaraj Sanmugam, allegedly detained on 1st January 1998 in Pangudaweli, Batticaloa District, by the Sri Lankan Army;
- (ee) Jeyanthanan Sornalingam, allegedly disappeared on 4 January 2000 in Chenkaladi. It is believed that he was abducted by the Sri Lankan army;
- (ff) Sundharajan Thillaiyambalam, allegedly abducted on 8 July 2004 from his home in Pangudaweli, Batticaloa District, by unknown officials in a white van;
- (gg) Baskaran Vadivelu, allegedly disappeared on 16 April 2004. It is believed he was abducted by the Sri Lankan Army;
- (hh) Johndonbosco Francis, allegedly abducted on 21 April 1992 while fishing and navigating in direction of Jaffna, by members of the Mandaithivu Sri Lankan Navy;
- (ii) Jeyasundara Hiniduma Liyanage, allegedly abducted on 15 November 1988, from his house in Galle, by members of the Sri Lanka Army;
- (jj) Chandrapala Kalagejagodage allegedly arrested at Bandaranayaka International Airport on 3 August 1990, by the police.

Syrian Arab Republic

5. The Working Group transmitted 33 cases to the Government, concerning:
- (a) Mayada Wakel, allegedly abducted on 7 April 2013 along with her five minor children by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint "Saqr Rostom" near the city of Homs;
- (b) A minor boy, allegedly abducted on 7 April 2013 along with his mother and four siblings by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint "Saqr Rostom" near the city of Homs;
- (c) A minor boy, allegedly abducted on 7 April 2013 along with his mother and four siblings by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint "Saqr Rostom" near the city of Homs;
- (d) A minor girl, allegedly abducted on 7 April 2013 along with her mother and four siblings by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint "Saqr Rostom" near the city of Homs;
- (e) A minor girl, allegedly abducted on 7 April 2013 along with her mother and four siblings by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint "Saqr Rostom" near the city of Homs;
- (f) A minor girl, allegedly abducted on 7 April 2013 along with her mother and four siblings by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint "Saqr Rostom" near the city of Homs;
- (g) Nawal Alkhalil, allegedly abducted on 7 April 2013 along with her three minor children by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint "Saqr Rostom" near the city of Homs;

- (h) A minor boy, allegedly abducted on 7 April 2013 along with his mother and two siblings by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint “Saqr Rostom” near the city of Homs;
- (i) A minor boy, allegedly abducted on 7 April 2013 along with his mother and two siblings by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint “Saqr Rostom” near the city of Homs;
- (j) A minor boy, allegedly abducted on 7 April 2013 along with his mother and two siblings by members of the National Defense Militia reportedly affiliated with the Syrian Government at the checkpoint “Saqr Rostom” near the city of Homs;
- (k) Mazen Al-Hamada, allegedly abducted on 22 February 2020 from either Berlin Schoenefeld or Berlin Tegel Airport by an official affiliated with the Syrian Government from which he was reportedly transferred to Syria where he subsequently disappeared. In accordance with its methods of work, the Working Group transmitted a copy of the case to Germany and the Netherlands;
- (l) Okba Mashaan, allegedly arrested on 28 March 2012 in Al-Bu Amer village by Baath party militias reportedly affiliated with the Syrian security forces;
- (m) Marwan Ibrahim, allegedly abducted on 14 November 2012 by armed groups affiliated with the Syrian security forces in the suburbs of Al-Hajar Al-Aswad;
- (n) Ayham Ghazzoul, allegedly abducted on 5 November 2012 from the Medical Faculty in Damascus by an armed group of students affiliated with Syrian security forces;
- (o) Mohammad Nassif, allegedly abducted on 25 November 2014 in Baqaa, Lebanon, by armed groups loyal to Hezbollah and then handed over to the Syrian intelligence services who transferred him to Syria. In accordance with its methods of work, the Working Group transmitted a copy of the case to the Government of Lebanon;
- (p) Mohammad Kheir Mamdouh Issawi, allegedly arrested on 6 October 2011 by the Syrian security forces on Hama Road between Kefr Zaite and Hama at a temporary checkpoint which was set up for several hours;
- (q) Mamdouh Raheel Dukhan, allegedly arrested at his shop in Damascus on 10 November 2015 by members of the Syrian security forces;
- (r) Hassan Hikmat Hussein, allegedly arrested on 13 April 2013 by Syrian security forces at a temporary checkpoint on the way to Al Hal market;
- (s) Mustafa Ahmad Rashed Suleiman, allegedly abducted on 29 April 2017 from his home in Arbin by members of the Islamic Army presumably supported by the Syrian security forces;
- (t) Abdallah Thalj Al Salman, allegedly arrested on 21 March 2013 by the Syrian armed forces close to Najha Military Residence in Damascus;
- (u) Mohammad Badih Hajj Mahmoud, allegedly arrested on 17 October 2013 by the Syrian armed forces in a raid on his house in Latakia;
- (v) Mohamed Abdul Qader al Sheikh, allegedly arrested in May 2012 by the Syrian armed forces in Aleppo;
- (w) Abdel Qader Abdel Hamid Sulieman, allegedly arrested in November 2012 by members of the Syrian armed forces in Idlib;
- (x) Abdel Razak Dahan Dukhan, allegedly arrested in August 2014 by members of the Syrian armed forces at a check-point close to the Syria-Lebanon border;
- (y) Wissam Ali Al Hallaq, allegedly arrested on 7 March 2013 by members of the Syrian armed forces in Aleppo;
- (z) Ahmad Najdat Tofran, allegedly abducted on 21 April 2013 by members of the Syrian armed forces at a checkpoint located at Dummer al Balad, Damascus;
- (aa) Mahmoud Mostafa Quzhair, allegedly arrested on 6 June 2012 by members of the Syrian armed forces in his home in Idlib;

(bb) Gayyath Hajji Abdel Qader, allegedly arrested on 4 June 2012 by members of the Syrian armed forces in his home in Ramliyah;

(cc) Mohammad Ali Al Ali, allegedly arrested on 29 November 2018 by the Syrian armed forces at a checkpoint on the cross-road of Abu Dhur;

(dd) Ibrahim Ramadan Zaidan, allegedly arrested on 1 March 2013 by the Syrian armed forces at a checkpoint at Mesaif bridge, near West Hama;

(ee) Fajr Hamduna Al Abdallah, allegedly arrested in September or October 2012 by the Security branch at military barracks at Jabal Al Sheikh;

(ff) Hisham Khaleel Daher, allegedly arrested on 10 July 2011 by the Syrian security services at Government Department building in Idlib;

(gg) Nasr Thabet Bsses, allegedly arrested on 13 February 2013 by an armed group affiliated with the Syrian armed forces in a raid on his house in Al Haffa.

Annex II

[Spanish only]

General allegations

Colombia

1. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre obstáculos encontrados en la aplicación de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en Colombia.
2. Según la información recibida, los miembros de la comunidad campesina de Recetor y Chámeza, Colombia, fueron objeto de un conjunto de violaciones de los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones sumarias, amenazas de muerte, desplazamiento forzado y despojo entre noviembre de 2002 y marzo de 2003 en el marco de la Política de Seguridad Democrática, implementada a partir de 2002. Las desapariciones forzadas, aparentemente utilizadas de forma sistemática como herramienta para controlar y aterrorizar a la población local, han sido presuntamente cometidas por grupos paramilitares y agentes del Estado, actuando estos últimos en complicidad o con aquiescencia.
3. De acuerdo con la información proporcionada, estas violaciones se produjeron en el marco de las operaciones de contrainsurgencia contra los grupos guerrilleros de la zona, incluida la Operación Emperador del ejército colombiano, a través de la Fuerza de Tarea Cazador. Como resultado, se registraron 62 casos de desaparición forzada en la comunidad de Recetor y 21 casos en la comunidad de Chámeza, seguidos por el desplazamiento forzado masivo del 75% de la población regional. La falta de prácticas de investigación eficaces y rápidas en relación con la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación penal de los presuntos autores fomentó un clima generalizado de impunidad.

A. La práctica de desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos

4. Se señala que la presunta violencia sistemática en los municipios de Recetor y Chámeza, derivó de la disputa por los recursos naturales, debido al descubrimiento de petróleo en el suelo de Recetor, que consolidó como prioritarias las políticas de minería y orden público del Estado sobre el territorio. Debido a la llegada de grupos armados como las *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC) y el *Ejército de Liberación Nacional* (ELN) en la década de 1990, la población fue consecuentemente estigmatizada por estar vinculada a los grupos guerrilleros y sus actividades. En consecuencia, desde los años 90 el Ejército hizo presencia para proteger la infraestructura petrolera y desde 2002 operó como parte de la política de contrainsurgencia, lo que resultó en una militarización permanente de la zona según la fuente.
5. Según la información recibida por el Grupo de Trabajo, las desapariciones forzadas y otras graves violaciones de derechos humanos afectaron a siete veredas - El Vagón, Guruvita, Comogo, Sinagaza, Teguita Alta, Guafal de Caja y Barriales- que pertenecían a la jurisdicción bajo control del Ejército colombiano, entre ellos el Batallón de Infantería 44 Ramón Nonato Pérez y el Batallón Móvil de Contraguerrilla No. 25 Héroes de Paya.
6. Según la fuente, las alianzas contrainsurgentes estaban conformadas por el Ejército Nacional a través del Comandante del Batallón 44 Ramón Nonato Pérez y por un grupo paramilitar a través del Comandante militar de las *Autodefensas Campesinas del Casanare* (ACC). Se alega la complicidad sistemática entre las fuerzas militares, los grupos paramilitares y las autoridades civiles evidenciada en la coautoría, connivencia, tolerancia, aquiescencia y encubrimiento de las mencionadas graves violaciones de derechos humanos. La coordinación militar-paramilitar también habría incluido la entrega de información de inteligencia y, en particular, la elaboración, en cooperación con las autoridades civiles, de "listas negras" en las que se enumeran los nombres de las personas que supuestamente cooperaban con los grupos guerrilleros.

7. Según se informa, las víctimas afectadas por las mencionadas violaciones fueron campesinos, agricultores, empleados, médicos, estudiantes y personas acusadas de haber colaborado con los grupos guerrilleros. Las personas fueron secuestradas a plena luz del día y llevadas a los campamentos paramilitares, donde fueron sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la práctica de golpearlas, quemarlas, cortarlas con cuchillos, desmembrarlas, asfixiarlas con jabón o ejecutarlas sumariamente. Asimismo, en el campamento paramilitar, las personas cautivas debían someterse a interrogatorios en los que se les obligaba a acusar a miembros de la comunidad de estar vinculados a los grupos guerrilleros.

8. Se alega que estas prácticas fueron seguidas por la destrucción parcial de las viviendas de las personas desaparecidas y sus familias, el robo de sus fuentes de sustento, así como amenazas de muerte, lo que resultó en el desplazamiento forzado del 90% de las familias de personas desaparecidas. A largo plazo, estas prácticas destruyeron la economía campesina, las tradiciones culturales, así como el tejido social de la sociedad campesina y el vínculo con sus tierras según la fuente.

B. Deficiencias en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas

9. A pesar de las visitas interinstitucionales de entidades de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas entre otras instituciones, se alega que prevalece la falta de formulación de Planes de Búsqueda en el Plan Metodológico de las investigaciones realizadas por las Fiscalías y la inexistencia de planes regionales de búsqueda de personas desaparecidas. 17 años después de los hechos, y casi cinco años después del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las FARC, el gobierno no habría proporcionado planes de búsqueda adecuados en el 99% de los casos pendientes según la fuente.

10. Se informa además que la participación de las víctimas en la elaboración de los planes de búsqueda, así como en cualquier otra política pública, habría sido sistemáticamente obstaculizada debido a la ausencia de voluntad política. La exclusión de las víctimas de los comités técnicos formados para la búsqueda limitaría aún más la eficacia de las investigaciones. Según la información proporcionada por la fuente, no se han llevado a cabo investigaciones efectivas sobre los actos de violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual y la desaparición forzada.

11. Asimismo, la fuente reporta la ausencia o el retraso significativo de los procesos de exhumación e identificación de los restos humanos exhumados bajo la Ley 975/05c y la falta de devolución de dichos restos a sus familiares. Se informa que la ausencia de participación de agencias forenses extranjeras independientes por falta de voluntad política, la falta de la sistematización oficial de las fosas y los restos humanos encontrados y de información sobre el estado de los procedimientos de pruebas de ADN facilitados a las víctimas obstaculizan gravemente los procesos de identificación.

C. Impunidad generalizada

12. Se señala a la atención del Grupo de Trabajo que el gobierno supuestamente no investigó ni procesó a los agentes estatales presuntamente responsables de los crímenes cometidos, lo que fomentó un nivel alarmante de impunidad según la fuente. Aunque los principales jefes paramilitares de las ACC fueron procesados, ningún oficial o suboficial del ejército, ni autoridad civil identificada como responsable en relación con los hechos o con responsabilidad de mando, salvo un coronel, habría sido llamado a juicio disciplinario o penal para responder a los graves hechos, acciones y omisiones que condujeron a las mencionadas violaciones de derechos humanos.

13. Por el contrario, se documentaron intentos de minimizar el número de víctimas y de ocultar la ocurrencia de desapariciones forzadas por parte de las autoridades militares y civiles. Las investigaciones penales se habrían caracterizado por una gran negligencia, con la prevalencia de pesquisas insulares o paralizadas en fases “preliminares”, retrasos en los procedimientos, cierre de las investigaciones sin encontrar a las víctimas y filtración a perpetradores de información de las investigaciones. En consecuencia, la fuente alega que la responsabilidad del Estado por las masivas y reiteradas desapariciones forzadas y violaciones

de derechos humanos contra la población civil de Recetor y Chámeza está profundamente comprometida.

14. La fuente denuncia además la ausencia de sanción disciplinaria y/o penal de los funcionarios públicos que dilataron, o bajo los cuales se paralizaron las investigaciones.

E. Procesos de revictimización y falta de reparación

15. Según la fuente, existe un clima de intimidación y hostigamiento contra los familiares de las personas desaparecidas que les impide presentar denuncias y los somete a graves consecuencias psicológicas, como la ansiedad y el estrés, que pueden equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante, o incluso a la tortura y otras formas de revictimización.

16. De acuerdo con la fuente, no se han realizado medidas efectivas de memorialización frente a las graves violaciones cometidas en la comunidad de Recetor y Chámeza. Por ejemplo, las políticas públicas relacionadas con la Verdad y la Memoria están enteramente ausentes en relación con las escuelas públicas en la comunidad, que habrían sido utilizadas como centros de tortura, encarcelamiento y ejecución sumaria. La ausencia de estas políticas perjudica gravemente el reconocimiento de los crímenes y la restauración de la dignidad de las víctimas de desaparición forzada.

17. La fuente concluye que la falta de reparación de las víctimas y el abandono social del Estado en relación con las diversas formas de revictimización de las víctimas de desapariciones forzadas provocó una grave situación humanitaria y generó un efecto perjudicial en el disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales. Por último, la ausencia de programas psicosociales para víctimas obstaculiza cualquier posibilidad de reparación del impacto psicológico duradero resultante de la práctica de la desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos.

18. El Grupo de Trabajo estaría agradecido por la cooperación y toda la información que pueda proveer el Gobierno de Su Excelencia sobre las siguientes preguntas:

(i) Si los hechos relatados en la presente alegación son exactos. Si no es así, ¿cuáles son los hechos reales?

(ii) Sírvase explicar qué medidas se han tomado para la búsqueda de las 62 personas desaparecidas en Recetor y las 21 personas desaparecidas en Chámeza, y si se han formulado planes de búsqueda en relación con las desapariciones forzadas perpetradas en la región. Asimismo, si se han entablado diálogos con los familiares de desaparecidos y se les ha permitido participar en la elaboración del plan de búsqueda.

(iii) Si se han tomado medidas para investigar la alegada coordinación delictiva entre las fuerzas militares y paramilitares con autoridades civiles, en particular la producción e intercambio de información de inteligencia con “listas negras” de quienes luego serían víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Asimismo, si se han adoptado medidas para desclasificar, recopilar y sistematizar información de inteligencia relacionada con estos hechos. Sírvase también informar si se han formulado imputaciones contra las autoridades militares y civiles presuntamente involucradas en los hechos.

(iv) Si se han llevado adelante investigaciones penales o disciplinarias para deslindar la responsabilidad de los funcionarios públicos que habrían paralizado las investigaciones de los hechos.

(v) Sírvase describir se han adoptado políticas para la reparación integral de los familiares de las personas desaparecidas, incluyendo programas para posibilitar su retorno, así como el del resto de la población regional desplazada forzosamente. Asimismo, si se han elaborado políticas públicas para la memorialización de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas, en particular en relación con el alegado uso de escuelas como centros de tortura de las personas que eran secuestradas.

México

19. El Grupo de Trabajo recibió información de fuentes fidedignas sobre obstáculos encontrados en aplicación de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La presente alegación general trata las irregularidades en las que ha incurrido la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) en el manejo de cadáveres no identificados.

20. Entre el 23 de mayo y el 6 de junio de 2016, según señala el párrafo 4 de la Recomendación 48/2016, publicada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos: ‘Informe de Búsqueda, identificación y registro de personas desaparecidas’, fueron exhumados de la fosa común de Tetelcingo un total de 119 cadáveres. De éstos, 107 cuerpos contaban con carpeta de investigación, 8 cuerpos sin ella y 3 cuerpos fueron donados por la FGEM a distintas universidades del Estado de Morelos.

21. En 2015, las organizaciones de familiares desaparecidos en el Estado de Morelos, constataron la existencia de una fosa clandestina en la colonia Pedro Amaro, en el municipio de Jojutla. El acta de Cabildo, con fecha 14 de mayo de 2014, señala que la FGEM, en colaboración con las autoridades municipales, inhumó 38 cadáveres, si bien el Fiscal de la época, Javier Pérez Durón, aseguró en medios de comunicación que sólo existían 35 cadáveres con su carpeta de investigación.

22. Entre marzo y abril de 2017, se logró la exhumación de la fosa de Jojutla en la que se encontraron además de las 38 inhumaciones que la Fiscalía reconoció, 85 perfiles genéticos sin identificar. No obstante, los trabajadores del Panteón Pedro Amaro declararon que dicha fosa podría contener 150 cadáveres, aunque las exhumaciones se detuvieron a los 85 hallazgos. Habiendo transcurrido tres años, no hay avances en las investigaciones y 84 de los 85 hallazgos recuperados siguen en calidad de desconocidos (continúan sin identificar).

23. Además, ‘los restos exhumados del Panteón Pedro Amaro fueron inhumados nuevamente en el Panteón Jardín de los Recuerdos en Cuautla, Morelos y no en frigoríficos como debía haberse hecho para mantener la cadena de custodia de la evidencia forense’.

24. De esta manera, la actuación de la FGEM en la fosa de Jojutla habría permitido la continuidad de las desapariciones forzadas, en al menos dos ocasiones: ‘la primera vez disponiendo los cuerpos en la fosa común irregular de la colonia Pedro Amaro, sin ningún tipo de protocolo, respeto, o manejo...’, y la segunda ‘por el tratamiento dispensado a la evidencia recuperada, tanto a los cuerpos recuperados como a los accesorios encontrados junto a los cuerpos (...), destrozando así la evidencia forense que aún se conservaba con los hallazgos’.

25. Según la información recibida, la FGEM:

26. No aplicó los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas.

27. En concreto, no ha creado perfiles genéticos que permitan cotejar los restos hallados con las familias que buscan a sus seres queridos, aumentando de manera injustificada la incertidumbre de las familias. De esta manera, la FGEM ha faltado a la obligación de llevar a cabo la identificación forense, reconocida en numerosas ocasiones por la jurisprudencia de la Corte IDH (entre otros, Caso de la Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, párr.178) y la Relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias, en su Informe A/75/384/, de 12 de octubre de 2020.

28. La FGEM ‘tampoco ha designado un enlace familiar que pueda dar cuentas del avance en el proceso iniciado con la exhumación de las fosas- como sugiere el ‘Protocolo de Minnesota’; no cuenta con una estrategia específica para identificación de los cadáveres encontrados; no conservó la cadena de custodia que establece dicho protocolo, y permitió que la administración municipal interviniera en los predios colindantes a la fosa, acordonados para su exhumación.

29. En este sentido, la Corte IDH ha señalado en varias ocasiones que en el manejo de la escena del crimen y el tratamiento de los cadáveres es necesario actuar con la debida diligencia necesaria para conservar los elementos de prueba que permitan concluir con éxito la investigación (Caso González y otras vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009,

párr.301). En cuanto a conservar la cadena de custodia, la Corte IDH considera que consiste en llevar un registro escrito preciso, complementado por fotografías y otros elementos que permitan reconstruir la historia del elemento probatorio (Caso Velázquez Paíz y otros vs. Guatemala. Sentencia de 19 de noviembre de 2015, párr. 153).

30. Además, transcurridos tres años desde las exhumaciones, la falta de actuación de la FGEM, supone la vulneración de la obligación de llevar a cabo la búsqueda de la persona desaparecida, que incluye una investigación penal de los responsables de la desaparición. En este sentido, las fuentes están preocupadas por el hecho de que la FGEM ha detenido las durante 3 años las investigaciones, paralizando las actuaciones tendientes a identificar los perfiles genéticos hallados en la fosa de Jojutla. Asimismo, ‘ha limitado el derecho a la verdad de las familias de los desaparecidos, al restringir las informaciones sobre la fosa de Jojutla, coartar la participación de las familias en las investigaciones y dilatar las acciones tendientes a identificar los 84 cuerpos que continúan sin identificar’.

31. El Grupo de Trabajo estaría agradecido por la cooperación y toda la información que pueda proveer el Gobierno de Su Excelencia sobre las siguientes preguntas:

- (i) Si los hechos relatados en la presente alegación son exactos. Si no es así, ¿cuáles son los hechos reales?
- (ii) ¿Qué medidas han sido adoptadas por el Gobierno de Su Excelencia para requerir a la FGEM que demuestre las acciones llevadas a cabo para la identificación de los restos mortales hallados en la fosa de Jojutla?
- (iii) ¿De qué manera ha adoptado la FGEM un ‘¿Plan de Exhumaciones’ a fin de identificar cuántas fosas comunes irregulares hay actualmente en Morelos, dónde están localizadas y cuál ha sido la participación de las autoridades en su funcionamiento?
- (iv) ¿En qué medida cabría la posibilidad de que la FGEM construyese un Centro de Identificación Humana con el equipamiento necesario para llevar a cabo el peritaje de los casi 700 cuerpos que continúan sin identificar y de los que se recuperarían de otras fosas comunes irregulares?

Syrian Arab Republic

32. The source reports that, between 2011 and 2017, the Syrian government, acting through branches of the Syrian Armed Forces and State Security Department, systematically perpetrated enforced disappearances against Sunni Muslims in Aleppo, Damascus, Homs, Idlib, Latakia and Rif-Dimashq. The large geographic spread is indicative of the widespread nature of the disappearances perpetrated by the government.

33. In many cases, the events amounting to the deprivation of liberty of the concerned individuals occurred in a public setting, often in full view of the victim’s family and neighbours. The relatives have described the way in which their loved ones were forcibly removed from their homes or places of work by Syrian military officers. In several cases, Syrian military officers physically beat the alleged victims while they stood standing in the street, or while they were being taken to the car.

34. The alleged arrests were also carried out at checkpoints run by the Syrian military. As the fighting in Syria intensified, the number of checkpoints in the country increased exponentially. The Syrian military used checkpoints to verify IDs and to conduct personal searches. It has also been suggested that checkpoints were set up for the explicit purpose of forcibly disappearing people. In some instances, the deprivation of liberty leading to the disappearances occurred at a checkpoint on the border between Syria and Lebanon.

35. In the majority of cases, the precise reason for the arrest or other deprivation of liberty remains unknown. The source details how Syrian military branches would carry out mass arrests of men, in particular, in a way that appears random and indiscriminate. The impression left on the relatives is that the intention behind the carrying out of mass public arrests was to incite terror in the local community.

36. Although the individuals disappeared by the Syrian military appear to be random targets, the source suggests that there is an underlying logic to the military's activities. While some relatives allege that sectarianism lies at the heart of their loved ones' disappearance, others suggest that there is a punitive aspect to enforced disappearance, claiming their loved ones were disappeared as retaliation for local resistance to the government. One of the few concrete reasons for deprivation of liberty indicated is a failure to perform military service.

37. The deprivation of liberty was followed by a complete refusal on the part of the Syrian authorities to disclose information about the fate or whereabouts of the concerned person, or even to acknowledge their existence. The relatives describe desperate attempts to obtain further information about their loved ones, often over a prolonged period. In the absence of official mechanisms for obtaining further information, it is left to relatives' own initiative to undertake the necessary inquiries into the fate or whereabouts of their loved ones.

38. In many instances, fears of reprisals have prevented relatives from making further inquiries on the fate and whereabouts of their loved ones. Male members of the family are particularly fearful. As a result, it is often female family members, who put themselves at risk to uncover the fate or whereabouts of their missing relatives. On the rare occasions when relatives have been able to obtain information, it is usually through informal sources. Several have described attempts to leverage their personal connections with individuals, such as members of the military, who have close ties to the government. Often, they were only able to obtain information through informal sources by paying exorbitant amounts of money.

39. When relatives have attempted to follow up on the leads obtained through informal channels, they have come up against the state's refusal to verify the hard-won information by acknowledging the disappearance. The refusal to validate the relatives' search for the truth compounds the original act of disappearance and is a source of re-traumatization.

40. The information provided indicates that individuals forcibly disappeared by the Syrian government were subjected to torture and cruel, inhuman, or degrading treatment. Such treatment can occur from the moment of arrest or deprivation of liberty and continue throughout the disappearance.

41. Information received also describes the disappearance of Syrian nationals by a non-state armed group known as the Army of Islam, or the Islamic Army. While the Army of Islam does not appear to be a regular division of the Syrian Armed Forces, the information provided indicates that there was cooperation between the Army of Islam and the Syrian government, and that the former was operating with the acquiescence of the latter.

42. The source also outlines the predatory way in which private individuals have sought to exploit the grief caused by enforced disappearance. Abusing the trust placed in them by relatives who are desperate to know the circumstances of the disappearance and the fate or whereabouts of their loved ones, individuals close to the Syrian government have solicited bribes for the mere promise of information and the comfort that it may bring. This amounts to enriching oneself at the expense of relatives' fundamental right to know the truth.

43. The individuals involved in brokering information include military officials, judges, and lawyers. In some cases, the relatives have fallen victim to acts of pure deception, as the promised information fails to materialize, and the broker cuts off all communication with the relatives. In other cases, the brokers are engaged in acts of extortion rather than deception, demanding huge amounts of money for even the most modest services. Some relatives believe that brokers have gone so far as to mislead them about their loved one's death.

44. It is reported that the damage caused by enforced disappearance has overwhelmed the family structures that existed prior to the disappearance in Syria. In many cases, enforced disappearance resulted in the loss of not one parental relationship, but two, as the remaining caregiver struggles to deal with the psychological harm caused by the disappearance, while shouldering the new responsibilities that have been thrust upon them.

45. The source maintains that there is a clear link between the forcible disappearance of a family member and a reduction in children's educational development and attainment. The information provided reveals that education is often disrupted when a Syrian household loses a male relative. Most relatives reported some form of disruption to children's education as a result of their loved one's disappearance. Some cited loss of motivation as the primary reason,

re-emphasizing the severe psychological and emotional consequences of enforced disappearance. Others pointed to a drop in familial support for their education, the need to work, or the pressure to marry early. Though boys and girls are similarly affected, the underlying reasons are gendered.

46. It is indicated that patriarchal norms and structures in Syria mean that a girl's right to education is often precariously held. Young Syrian women and girls have repeatedly indicated that losing their father meant losing a pillar of support for their education. Some have lost their right to freely choose their own destiny completely. This is because the financial uncertainty caused by the disappearance of the family breadwinner puts young women and girls at risk of forced and child marriage.

47. Young men and boys have reported that they became acutely aware of the family's economic and social situation following the disappearance of the family breadwinner. Recognition of the economic disruption caused by the disappearance of the breadwinner goes hand in hand with a growing sense of responsibility to improve the family's financial and social situation. Young men and boys step into stereotypically male adult roles, including by becoming income earners, to meet the needs of the family. The information presented suggests that this disproportionately affects the first-born boy in the family.

48. The combined effect of all of these factors is that the forcible disappearance of a male breadwinner increases the risk that young men and boys will be forced into child labour. It is reported that young men and boys, whose parent is disappeared, start to work from around the age of 10. They perform jobs involving hard labour, such as farming, woodcutting, and carrying heavy goods. Such work is well beyond their physical development, making it hazardous to their health and physical wellbeing.

49. Although the source suggests that young men and boys are more likely to be forced into child labour, girls are also affected. Taking on the role of income earner impairs the enjoyment of other rights, particularly the right to education. Young men and boys have explained that education was incompatible with their new role within the family, as they took on responsibilities such as care of younger siblings and earning to support the family.

50. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government cooperation and observations on the following questions:

- (i) Please provide any additional information and any comment you may have on the above-mentioned allegations.
- (ii) What are the rules and the procedure for accurately and promptly informing family members, legal counsel or any other persons having a legitimate interest in the information on the places of detention of persons deprived of their liberty?
- (iii) How does your Government ensure the right to a prompt and effective judicial remedy as a means of determining the whereabouts of persons deprived of their liberty?
- (iv) Please provide information concerning safeguards to prevent the arbitrary deprivation of liberty, as well as to prevent torture and other acts of ill-treatment of persons deprived of their liberty.
- (v) How does your Government ensure that any person, having knowledge or legitimate interest, who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance is able to lodge a complaint to a competent and independent State authority? How does your Government ensure that complaints are promptly, thoroughly and impartially investigated by that authority? What steps does your Government take to protect relatives of the disappeared from any form of reprisals?
- (vi) What State authority is designated to receive and investigate such complaints? Does this authority have access to all places where persons deprived of their liberty are being held and to each part of those places, as well as to any place in which there are grounds to believe that such persons may be found?
- (vii) How does your Government ensure the right of victims and their relatives to an effective remedy, which should at minimum guarantee cessation of violations,

restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition?

(viii) Please indicate if the political process to bring about an end to the conflict includes negotiations aimed at the design and implementation of transitional justice measures to address the gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law committed against civilians since March 2011.

(ix) Please provide information in relation to the functioning of the Working Group on the Release of the Detainees/Abductees, the Handover of Bodies and the Identification of Missing Persons and whether victims and their families are consulted or participate in its work.

Annex III

[English and Spanish only]

Replies to general allegations

Colombia

1. On 14 January 2021, the Government replied to the general allegation transmitted after the 122nd session (A/HRC/WGEID/122/1 para 60, annex I).

Información sobre la alegación general respecto del Estero de San Antonio

2. El Director de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, mediante comunicación de 11 de diciembre de 2020, presentó, bajo el siguiente tenor, información respecto de las actuaciones realizadas respecto de la búsqueda de desaparecidos en el Estero San Antonio:

3. El señor Manuel Bedo Ya Holguin, presidente de la Asociación Nacional de Pescadores a Pequeña Escala & Artesanales de Colombia (ANPAC) allegó derecho de petición a finales de 2019, en donde relacionó varios hechos victimizantes en el municipio de Buenaventura, además de la posible presencia de restos humanos en el llamado Estero San Antonio.

4. El despacho 223 adscrito al Grupo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Dirección de Justicia Transicional, puso así en marcha la Fase 1 del Plan Nacional de Búsqueda, consistente en la compilación y documentación de la información indispensable para garantizar la eficacia de las acciones de búsqueda de las personas presuntamente inhumadas en el Estero San Antonio y la elaboración de protocolos técnicos aplicables a los procesos de búsqueda de cadáveres en cuerpos de agua, puesto que a la fecha no se cuenta con ellos.

5. Se ordenaron las siguientes actividades investigativas:

6. A. Ampliación de la información allegada por el señor Manuel Bedo Ya Holguín, presidente de la Asociación Nacional de Pescadores a Pequeña Escala & Artesanales de Colombia (ANPAC).

En diligencia de entrevista, el señor Bedoya Holguín afirmó que a partir del año 2000 los habitantes de Buenaventura fueron víctimas del conflicto armado promovido por el paramilitarismo, fenómeno que se caracterizó por la desaparición de más de 300 personas bajo la modalidad de desmembramiento en “casas de pique” siendo arrojadas posteriormente al Estero.

También indicó que la degradación del conflicto ha generado en los pobladores un temor generalizado a denunciar y brindar información: “conoce mamás, pero no dicen nada, no les saca usted ni unas palabras, se niegan a dar información. Pero en el barrio la playita hay muchas familiares quienes han sufrido las muertes de un familiar, pero no dicen nada. Hasta se ponen bravos si uno dice uno les pregunta algo (...)” (sic).

Esta problemática ha impedido poder establecer un universo real de desaparecidos en la zona debido al alto subregistro y bajo nivel de denuncia de los hechos ante las autoridades.

7. Ubicación de fuentes de información.

Se logró ubicar y entrevistar a un postulado a la Ley de Justicia y Paz que además de ser ex integrante del Bloque Calima de las AUC fue comandante de urbanos en el municipio de Buenaventura desde el año 2001 hasta el 18 de diciembre de 2004’.

La fuente indicó que ha enunciado y aceptado ante los Fiscales de Justicia y Paz su responsabilidad en la desaparición de varias víctimas en el municipio mencionado y que, en el rango temporal del 2000 al 2004, los paramilitares acordaron con miembros

de la Policía y la Armada Nacional no dejar los cuerpos de las personas asesinadas en las vías públicas para evitar llamados de atención a dichas autoridades, implementando así la modalidad de inmovilizar a las víctimas (amarradas de pies y manos) para ser llevadas en vehículos a los diferentes muelles clandestinos ubicados en zonas de bajamar donde se encontraban las embarcaciones de propiedad de las AUC.

De ahí eran conducidas a los manglares del Estero San Antonio y amarradas a sus raíces o dejadas entre 7 a 10 metros o de 20 a 30 metros de la orilla conforme el estado de la marea.

Agregó que “en el sitio denominado Estero San Antonio no hay fosas porque las víctimas no eran enterradas ahí, no había tierra firme, se dejaban amarradas a las raíces de los mangles con el estómago abierto, considero que a las fechas muchas de estas víctimas que se dejaron en estos Esteros va a ser imposible recuperar sus restos por el fenómeno de la marea, este fenómeno ayuda que los huesos se desintegren con mayor facilidad o en su defecto se encuentren marea más adentro ya que esto hace muchos años” (sic).

Por otra parte, el informante manifiesta estar en capacidad de mostrar a las autoridades los puntos en los cuales eran dejadas las víctimas, situación que será verificada una vez se cuente con los recursos logísticos y de seguridad que permitan su comparecencia en la zona’.

Adicionalmente, mediante correo electrónico del 21 de agosto del año en curso se solicitó a la Fiscalía 18 Delegada ante Tribunal indagar en diligencia de versión libre a los demás postulados del Bloque Calima de las AUC respecto a las desapariciones en el Estero de San Antonios.

En lo concerniente a las personas desaparecidas en un lapso distinto a la temporalidad del Bloque Calima (es decir diferente al año 2000 a 2004), el despacho 22J GRUBE se articuló con la Fiscalía 53 delegada del eje temático de desaparición forzada de Buenaventura’ para realizar las siguientes actividades investigativas:

- Labores de vecindario con apoyo de la Capitanía de Puerto de Buenaventura e Infantería de Marina, el ANPAC y la SIJIN con el fin de establecer la extensión del Estero, su área y los barrios lo conforman.
- Consultas en SIRDEC y sistema WATSON a fin de establecer el universo de desaparecidos reportados en los barrios que conforman el Estero.
- Consecución de mapas y ubicación de fuentes y/o testigos que indiquen posibles identidades de personas desaparecidas o muertas y lugares donde se encuentran inhumados clandestinamente.
- Revisión interna de las investigaciones que actualmente cursan en las fiscalías del eje temático de desaparición forzada de Buenaventura.
- Revisión de los registros que figuran tanto en SIJUF como SPOA de las investigaciones activas o inactivas por desapariciones ocurridas en Buenaventura del 01 de enero de 2006 al 31 de agosto de 2020.
- Análisis de contexto y asociación de casos dirigido a la construcción de patrones comunes en el actuar de los agentes generadores de violencia, como son la Empresa, los Urabeños, las AUC y las FARC que vienen afectando e impactando a la comunidad de Buenaventura, específicamente en los barrios LLERAS, SAN JOSE, ALFONSO LOPEZ, MURO YUSTI, VIENTO LIBRE, LA PLA YITA, LA PALERA, LA INMACULADA Y PUNTA DEL ESTE, PUEBLO NUEVO, JUAN XXIII, ROCKEFELLER Y SAN LUIS, BELLA VISTA, PAMPA LINDA Y CRISTAL.

El proceso de búsqueda se encuentra actualmente en la recolección de más datos para dar paso a las fases 2 y 3 del Plan Nacional de Búsqueda, esto es el análisis y verificación de la información con miras a la implementación de acciones para el impulso y avance de las investigaciones, además de la definición de mecanismos de búsqueda aplicables al contexto del caso.

8. C. Caracterización de la zona que abarca el Estero de San Antonio.

Con e/ objetivo de definir un contexto geográfico y medioambiental del Estero, se ofició a la Fuerza Naval del Pacífico del Ejército Nacional, al Establecimiento Público Ambiental (EPA), a la Corporación Autónoma Regional de Valle del Cauca (CVC), al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR) y a la Dirección General Marítima (DIMAR) solicitando su caracterización.

Las respuestas han sido analizadas de manera conjunta con el Ejército Nacional y con /os peritos del Grupo de Criminalística de Nivel Central con miras a definir estrategias de búsqueda viables.

9. D. Solicitud che apoyo a cuerpos de rescate.

El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación no cuenta actualmente con buzos o personal especializado en procesos de búsqueda y recuperación de restos óseos en cuerpos de agua.

En consecuencia, el despacho 223 GRUBE y la Fiscalía 53 seccional de Buenaventura han solicitado al Ejército Nacional, a los Bomberos Voluntarios de Buenaventura y la Defensa Civil Colombiana de la Seccional Valle, el apoyo de recurso humano para dicha labor.

Los Bomberos Voluntarios y el Ejército Nacional respondieron que no cuentan con personal idóneo en el tema. Se está a la espera de una respuesta por parte de la Defensa Civil.

10. Restos óseos de personas víctimas de desapariciones forzadas halladas en el Estero San Antonio.

Según lo informado por la coordinación de los Grupos de Identificación Humana del CTI Nivel Central, se han recuperado varios cuerpos que fueron hallados por los pobladores en áreas de bajamar y flotando en las aguas del Estero San Antonio:

11. ENTERO SAN ANTONIO – BUENAVENTURA

12. Radicado Nunc 761096000163201002605 Fosa 1 Acta 1 - CNI Fecha Exhumación: 23/11/2010

Despacho Fiscal: 27 Seccional – Buenaventura Fuente: Sin Más Información

Resultados. Sexo: Indeterminado, Eda. Indeterminada; Talla: Indeterminada, Patrón Racial: Indeterminado; Manera De Muerte: Homicidio; Causa De Muerte: Indeterminada; No Apto Para Genética

13. Radicado Nunc 761096000163201002605 Fosa 2 Acta 2 – CNI Fecha Exhumación: 23/11/2010

Despacho Fiscal.’ 27 Seccional – Buenaventura Fuente: Sin Más Información

Resultados: Sexo: Indeterminado, Eda: Indeterminada; Talla: Indeterminada; Patrón Racial: Indeterminado; Manera De Muerte.’ Homicidio; Causa De Muerte: Indeterminada; No Apto Para Genética

14. Radicado Nunc 761096000163201002605 Fosa 3 Acta 3 – CNI Fecha Exhumación: 2J/f 1/2010

Fiscal: 27 Seccional – Buenaventura Fuente.’ Sin Más Información

Resultados: Sexo: Indeterminado, Eda: Indeterminada, Talla: Indeterminada; Patrón Racial. Indeterminado; Manera De Muerte: Homicidio,’ Causa De Muerte.’ Indeterminada, No Apto Para Genética

15. De otra parte, se relaciona radicado NUNC, bajo el cual se recuperaron tres (3) cuerpos, en el Estero San Antonio, los cuales fueron entregados a Medicina Legal - Cali:

Radicado Nunc 761096000164201501606 Fecha Exhumación. 25/11/2015

Despacho: Fiscal Indagación – Buenaventura Fuente: Sin Información

16. **Cuerpo Entregado A Medicina Legal Y Ciencias Forenses – Cali:**

Teniendo en cuenta los informes de las diligencias de exhumación por parte del Grupo de Identificación Humana del CTI, la caracterización del Estero San Antonio realizada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y los resultados de genética de las muestras biológicas, la coordinación del Grupo de Criminalística conceptuó sobre los factores de descomposición que influyen en los cadáveres que se encuentran inmersos en agua desde la experiencia de la disciplina de la antropología forense, así.

17. Es importante recordar que los procesos de descomposición por los que atraviesa un cadáver desde el momento de su muerte hasta su recuperación en tierra o agua están relacionados con agentes físicos y químicos que participan en el deterioro y transformación de sus estructuras óseas y dentales, estos son: PH, clima, entorno, temperatura, humedad, e intervención al cadáver de fauna y plantas, además del tiempo transcurrido antes de su recuperación, como también a las heridas que causaron su muerte.

18. Estos procesos producen pérdida ósea, desmineralización y erosión que debilita las estructuras óseas hasta hacerlas desaparecer siendo reabsorbidas por el entorno o el medio donde estuvo expuesto el cadáver.

19. Haciendo una analogía del contexto y de los análisis en laboratorio sobre los casos recuperados en zonas de manglares, tenemos el caso de Tímbiqui, donde los cadáveres que llevaban 40 días en esta zona, se hallaron esqueletizados y desarticulados en su anatomía y dispersos por el manglar. Lo anterior puede ser producto de los animales carroñeros o del alto oleaje, o el denominado “reflujo de marea donde se observan velocidades fuertes de corriente” y las estructuras óseas meteorizadas, producto del alto índice humedad.

20. Se ha observado que los cuerpos recuperados de espejos de agua (ríos, manantiales, lagos, mar), por el alto grado de saturación de agua han perdido casi todas sus propiedades y en la mayoría de los casos, las estructuras óseas y dentales presentan erosión, desmineralización y por consiguiente extrema fragilidad.

21. Dentro de los análisis de los perfiles bioantropológicos del GIH Seccional Cali, realizados a los cadáveres recuperados de la zona del municipio de Buenaventura, según RADICADO NUNC 761096000163201002605, se puede observar que el sexo, edad, talla, causa de muerte, tienen un resultado indeterminado y las muestras biológicas (hueso y dientes) no fueron aptas para ser enviadas a cotejo genético. Son las condiciones que presentan las estructuras óseas y dentales, que no permiten mejores resultados.

Conformación de mesa técnica con peritos del grupo de Criminalística y de identificación humana del CTI Nivel Central.

22. Actualmente, la entidad no cuenta con protocolos o cartas de navegación ni antecedentes técnicos que permitan orientar la búsqueda de restos óseos en los contextos geográficos planteados en el caso que nos ocupa.

23. Por tal motivo, se solicitó a la coordinación de los Grupos de Criminalística del CTI Nivel Central la designación de un perito con experiencia en análisis y abordaje de procesos de recuperación de cadáveres en cuerpos de agua, para que en una mesa técnica exponga la existencia o no de estándares técnicos mínimos para el abordaje de casos de similar naturaleza.

24. Adicionalmente, se requirió un concepto sobre los aspectos técnicos de factibilidad de consecución de restos óseos de las personas inhumadas en el Estero San Antonio, el cual se encuentra actualmente en construcción.

Comunicación remitida al INVIAS

25. Mediante oficio dirigido al doctor Juan Esteban Gil Chavarría, Director del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se informó que el GRUBE se encuentra adelantando diferentes actividades investigativas encaminadas a la recolección de información que permita guiar los procesos de búsqueda de varias víctimas del delito de desaparición forzada arrojadas al Estero San Antonio en el marco del conflicto armado interno.

26. De este modo, y en vista a la inminente ejecución del contrato de obra e interventoría para el dragado de mantenimiento en ese corredor fluvial, se instó al Instituto a tomar las medidas de prevención y preservación necesarias dirigidas a evitar la pérdida de los CNI que presuntamente yacen en el Estero.

27. Por otra parte, se indicó que, si en la ejecución de la obra civil citada se presentan hallazgos de zonas de inhumación clandestina o de restos óseos expuestos, se informará inmediatamente a esta Dirección.

Reuniones con las autoridades municipales de Buenaventura, el Observatorio Social del Delito y las organizaciones de víctimas.

28. El despacho 22J GRUBE ha tenido comunicación permanente con las organizaciones sociales que representan los intereses de los familiares de las víctimas desaparecidas, el Observatorio Social del Delito, la alcaldía municipal y su secretaría de Gobierno, haciendo presencia institucional en cada una de las convocatorias realizadas a la fecha.

29. Se ha ilustrado a la comunidad sobre los avances y los retos planteados por el caso que nos ocupa, buscando la construcción de canales de comunicación y retroalimentación.

Actividades a realizar.

30. Se programará una diligencia de verificación con la fuente informante para que indique los puntos en los que eran dejadas las víctimas desaparecidas.

31. Dichas coordenadas serán analizadas de manera conjunta con el INVIAS, el Ejército Nacional y su Armada y el CTI con el objetivo de evaluar si los puntos señalados serán afectados por las labores de dragado, además del diseño de estrategias de búsqueda aplicables al contexto de la zona a abordar, esto, teniendo en cuenta que las zonas de manglar se caracterizan principalmente por su difícil acceso al ser conformadas por raíces que impiden la navegación de ciertas embarcaciones y su recorrido a pie es difícil por ser terreno movedizo.

32. Desde el punto de vista técnico – científico se analizará la información recaudada una vez se finalice la fase 1 del PNB y se buscará el apoyo de organismos nacionales e internacionales que cuenten con personal calificado para el abordaje del caso en el contexto medioambiental actual.

Observaciones sobre algunos casos de conocimiento del Grupo de Trabajo

33. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mediante comunicación de 29 de diciembre de 2020, remitió información actualizada respecto de los casos ubicados en las casillas números 715, 282, 254, 887, 838, 531, 821 y 820, de los 943 casos bajo conocimiento del ilustre Comité.

34. Vale precisar que la Fiscalía Delegada para la Seguridad Ciudadana advirtió que: “[...] en relación a los restantes casos a cargo de dicha Delegada, no se encontró actualización en los sistemas misionales de información SIJUF y SPOA.[...]”

Kingdom of Saudi Arabia

35. On 10 August 2020, the Government replied to the general allegation transmitted after the 121st session (A/HRC/WGEID/121/1 para 112, annex D).

In response to the request to provide any additional information or comment on the allegations

36. The allegations and claims are untrue, based as they are on unfounded and uncorroborated information.

37. In the context of its cooperation with international human rights mechanisms, Saudi Arabia wishes to point out that its domestic law, which is derived from Islamic sharia and complies with the country’s international obligations, includes provision for the respect and

promotion of human rights. The law sets forth a number of statutory rights and safeguards, pursuant to which a judge is required to adjudicate fairly. Many of these principles are enshrined in the Basic Law of Governance, article 26 of which requires the State to protect human rights in accordance with Islamic sharia. Article 36 of the Basic Law of Governance stipulates that: “The State shall ensure the security of all its citizens and residents. The movement of individuals may not be restricted, nor may they be detained or imprisoned save in accordance with the law.”

38. Under article 7 of the Basic Law of Governance, governance in Saudi Arabia derives from the principles of Islamic sharia. Moreover, as per article 8 of the Basic Law, governance rests upon justice, consultation and equality, likewise in accordance with Islamic sharia. For its part, article 44 of the Basic Law defines the authorities of the State as: the judiciary, the executive and the regulatory authority. Each of the three has a specific mandate and they cooperate with one another in the exercise of their functions.

39. The judiciary in Saudi Arabia enjoys complete independence in the exercise of its functions meaning that it operates impartially and without external influence. No one, in fact, may interfere in its work. The judiciary derives its authority and principles from Islamic sharia, which enshrines the principle of justice as the basis of governance. Judicial independence is guaranteed under article 46 of the Basic Law of Governance, which reads: “The judiciary is an independent authority and the decisions of judges are subject to no authority other than that of Islamic sharia.” Article 1 of the Statutes of the Judiciary states: “Judges are independent. They are subject to no authority other than Islamic sharia and statutory law, and no one may interfere in the course of justice.” Moreover, according to article 48 of the Basic Law of Governance: “The courts apply the provisions of Islamic sharia to the cases that come before them in accordance with the Qur’an and the Sunna and with laws decreed by the ruler that do not conflict with the Qur’an and the Sunna.” As for article 49 of the Basic Law: “The courts in Saudi Arabia are competent to adjudicate in all crimes and disputes, with the exception of cases that fall under the jurisdiction of the Board of Grievances (the administrative judiciary).”

40. It should be noted that no one may be arrested, detained or restricted in his or her freedom of movement save as provided for by law, in accordance with article 36 of the Basic Law of Governance. Article 38 of the Basic Law enshrines the principles of the individual nature of punishment and the non-retroactive nature of laws. It states: “Penalties are personal and there can be no offence and no penalty save with reference to the provisions of sharia or statutory law. Penalties can be imposed only for actions subsequent to the enactment of a law.” For its part, article 3 of the Code of Criminal Procedure stipulates: “No one may be sentenced to a criminal penalty save for an act that is prohibited by sharia or statutory law and after being convicted in a trial conducted in accordance with due process of law.” The laws of Saudi Arabia envisage a number of procedural safeguards which regulate criminal proceedings, guarantee the rights of defendants and ensure that the latter are presumed innocent until found guilty under the terms of a final court judgment handed down in conformity with the legal and statutory requirements set forth in the provisions of the Code and of other laws relevant to the nature of the proceedings.

41. Under the laws of Saudi Arabia, all accused persons are guaranteed to have their case examined by a competent and independent court in a fair and public trial during which they are given the possibility of defending themselves, of calling upon the assistance of lawyers and of challenging the court’s rulings against them. Those rulings are then subjected to review before courts of a higher level. Saudi domestic laws guarantee freedom of opinion and expression for all persons unless such acts are deemed to breach or exceed the bounds of public order or the norms applicable to society, its members or its precepts. Such a restriction is consistent with the relative international standards, including article 29 (2) of the Universal Declaration of Human Rights, which states: “In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare.” It is likewise consistent with article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights according to which all persons have the right to hold opinions without interference and the right to freedom of expression, the latter being subject to certain restrictions such as are

necessary for respect of the rights or reputations of others and for the protection of national security or of public order, or of public health or morals.

42. All citizens and residents, men and women, enjoy their rights and exercise their freedoms without discrimination, in accordance with national law. No group, regardless of its designation, is accorded precedence with regard to the exercise of those rights and freedoms. Any person whose rights are violated may lodge a complaint using the available legal remedies.

43. Under the laws of Saudi Arabia, all accused persons are guaranteed to have their case examined by a competent and independent court in a fair and public trial during which they are given the possibility of defending themselves, of calling upon the assistance of lawyers and of challenging the court's rulings against them. Those rulings are then subjected to review before courts of a higher level. Moreover, no one may be sentenced to a criminal penalty save for an act that is prohibited by sharia or statutory law and after being convicted in a trial conducted in accordance with due process of law, as explained above. Investigators have the right to prevent an accused person from communicating with others for a limited period if that is in the interests of the investigation, without prejudice to the person's right to contact a legal representative or lawyer. This is a legal provision enshrined in article 119 of the Code of Criminal Procedure.

44. When accused persons make confessions of their own free will before the investigating authority, they must then endorse those confessions before the courts, in accordance with article 101 of the Code of Criminal Procedure. In making a judgment, the judge does not rely on confessions but on factual and presumptive evidence, arrest and search reports, witness testimonies, and cross-examinations and statements heard during the trial proceedings. Measures taken by the judge in that context may comprise hearing witnesses, visiting and inspecting the scene of the offence and seeking the assistance of experts, including forensic medical examiners. The trial, in fact, serves as the final investigation and therefore necessitates safeguards and protection for the parties involved. Article 161 of the Code of Criminal Procedure provides that if at any time accused persons confess to the charges against them, the court must hear their statements and question them on the details. It is a violation of Islamic sharia and domestic law to obtain evidence through torture and, under article 187 of the Code, any course of action that is contrary to Islamic sharia and applicable statutory law is invalid.

45. The Presidency of State Security is a government agency that concerns itself with all matters related to national security. Its functions, mandate and duties are not discretionary but are defined in domestic law, and it does not conduct trials. Like a number of other government agencies, it is associated with the Prime Minister. The presidency was established in order to enhance the capacities of security agencies, improve security-related decision-making and formulate security policies.

46. As regards the Public Prosecution Service, it is part of the Saudi judiciary and is entirely independent in the performance of its duties, meaning that it operates with full impartiality and without being swayed or influenced, and no one has the right to interfere in its work, in accordance with the Public Prosecution Act.

47. Judges in Saudi Arabia are appointed by decree of the Supreme Judicial Council, endorsed by royal order, in accordance with article 47 of the 2007 Statutes of the Judiciary, which stipulates: "Appointment and promotion in the judiciary shall be by royal order, pursuant to a decree of the Supreme Judicial Council setting forth the formal requirements applicable in each individual case." Judges are not appointed unless in possession of accredited diplomas. They are subject to certain conditions and are incorporated into the judiciary in accordance with articles 31 to 42 of the above-mentioned Statutes.

48. The functions of the judiciary and those of the executive are separate, each having its own specific mandate and remit. The judiciary enjoys complete independence in the exercise of its functions, as explained earlier.

49. With regard to the case involving the citizen Khaled al-Omair, the reply from Saudi Arabia made clear the reasons for his detention, the steps taken in his case at that time and

the fact that they bore no relation to his complaint that he had suffered torture in the previous case. The reply also indicated the date and place of his detention.

50. The laws of Saudi Arabia are consistent with articles 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13 and 14 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

In response to the request to provide information about safeguards against enforced disappearance

51. Domestic law in Saudi Arabia provides adequate human rights safeguards, including protection against enforced disappearance and other abuses. There are no secret detention centres in the country and, in accordance with article 26 of the Code of Criminal Procedure, persons may be arrested only by a law enforcement agency and under an arrest order issued by the competent authority. Under article 2 of the Code, persons may be detained or imprisoned only in a location designated for such purposes and for the period prescribed by the authority. According to article 37 of the Code: “No person shall be detained or imprisoned except in places designated for that purpose by the law. The administrator of a prison or detention centre may not admit anyone except pursuant to an order specifying the reasons for and period of detention, duly signed by the competent authority. The inmate shall not remain in custody following the expiry of the period specified in that order.”

52. The placement, transfer and release of prisoners and detainees is to be recorded in special registers, as per article 7 of the Prison and Detention Act. For its part, article 114 of the Code of Criminal Procedure states: “Detention shall end after 5 days unless an investigator sees fit to extend the period of detention in which case he shall, prior to expiry of that period, refer the file to the director of the Public Prosecution Service in the relevant province – or the person deputized to act for him from among the heads of the departments within his jurisdiction – so that he may issue an order, either to release the detainee or to extend the detention for a further period or successive periods, provided that the total does not exceed 40 days from the date of arrest. In cases requiring detention for a longer period, the matter shall be referred to the director of the Public Prosecution Service – or the person deputized to act for him – so that he may issue an order to extend the detention for a further period or successive periods, provided that each period does not exceed 30 days. Following that time, the accused must either be referred to the competent court or released. In exceptional cases that require detention for a longer period, the court may approve an application to extend the detention for a further period or successive periods as it sees fit, issuing a reasoned judicial ruling to that effect.”

53. All detention centres and prisons in Saudi Arabia are subject to judicial, administrative, health and social inspections in accordance with article 5 of the Prison and Detention Act. Moreover, under article 7 of the Act, no one may be placed in, transferred to or released from a prison or detention centre without a written order from the competent authority. The Public Prosecution Service carries out its oversight duties in line with its own Statutes, article 3 (f) of which grants prosecutors the authority to supervise and inspect prisons, detention centres and any other location in which criminal sentences are enforced, to receive complaints from prisoners and detainees, verify the legitimacy of their imprisonment or detention, check whether any persons are being held beyond the expiry of the specified term, take the steps to secure the release of persons imprisoned or detained without legitimate reason and launch legal proceedings against the persons responsible. For its part, the Human Rights Commission is authorized to visit prisons and detention centres at any time and without official permission, pursuant to article 5 (6) of its Statutes. In accordance with articles 5 and 11 of the Statutes, it verifies any potential violations that might have occurred and refers them to the competent authorities for them to take the necessary legal measures.

54. The National Society for Human Rights, which is a civil society association, also visits prisons and detention facilities, interviews inmates and detainees, receives complaints, monitors any violations that might have occurred and follows up with the competent authorities.

55. Offices have been allocated inside prisons for the Public Prosecution Service, the Human Rights Commission and the National Society for Human Rights. This helps to

facilitate the exercise of their oversight mandate, which includes receiving complaints from prisoners and detainees, ascertaining their veracity and addressing them promptly and directly.

56. Accused persons are to be referred to the investigating authorities within 24 hours of arrest, according to article 34 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: “A law enforcement official must immediately take the statement of the arrested person. If there appears to be sufficient evidence to charge that person, he must be referred to the investigating judge, along with the police report, within 24 hours. The investigating judge must interrogate the arrested person within 24 hours then order either his arrest or release.” Accused persons are to be questioned as soon as they have been arrested and, if this is not possible, they are to be placed in detention for a period not exceeding 24 hours. Once that period has passed, the director of the place of detention must inform the head of the department to which the investigator in question belongs, and the department must then proceed to investigate the accused person or order his release. This provision is enshrined in article 109 of the Code while, under article 118, law enforcement officials may not interview or communicate with a detainee without written authorization for the investigator. The article reads: “The director of a prison or detention centre may not authorize a law enforcement official to communicate with a detainee without written authorization for the investigator. In such a case, the name of the person so authorized, the time of the interview and the date and content of the authorization are to be recorded in the register.”

In response to the request concerning the right to a prompt and effective judicial remedy as a means of determining the whereabouts of persons deprived of their liberty

57. Under domestic law, State institutions have a legal obligation to ensure that all individuals are treated fairly, regardless of their religion, race, gender or nationality. If any of those institutions or their representatives, or anybody else, violates a person’s rights, there are a number of mechanisms that provide effective human rights safeguards within a reasonable time frame, in accordance with the law. These include the courts and governmental and non-governmental human rights institutions.

58. The right to challenge the legality of arrest or detention is a general principle of Saudi law and is set forth in article 115 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: “When an accused person is detained, the original detention order is to be delivered to the director of the detention centre, who is to sign a copy of the order as an acknowledgement of receipt. Pretrial detainees may lodge a complaint against a detention order or a detention-extension order. The complaint is to be submitted to the head of the investigating body to which the investigator belongs, the head of the branch or the Public Prosecutor, as appropriate, and a decision is to be taken within five days of the date of submission.”

59. One of the safeguards consists in the obligation to make accused persons aware of their legal rights at the moment of arrest or detention, in accordance with article 22 of the implementing regulation to the Code of Criminal Procedure, which states: “On arrest or detention, accused persons shall be informed of the following:

- (a) The reasons for the arrest or detention;
- (b) Their right to seek the assistance of a legal representative or lawyer during investigation and trial;
- (c) Their right to communicate with a person whom they wish to inform of their arrest or detention.

60. Accused persons are required to sign to acknowledge that they have been made aware of those rights. Any refusal to sign shall be noted in the record.”

61. The safeguards also include the right to seek the assistance of a defence lawyer or legal representative. In fact, article 4 (1) of the Code of Criminal Procedure reads: “Accused persons have the right to avail themselves of the services of a legal representative or lawyer during the investigation.” Article 70 of the Code states: “The investigator may not separate an accused person from his legal representative or lawyer during the investigation.” For its part, article 139 of the Code stipulates: “If persons lack the financial means to seek the

assistance of a lawyer, they may ask the court to appoint one to defend them, at State expense, as set forth in the regulations.” Under article 19 of the Act regulating the legal profession, all judicial bodies and investigating authorities must provide lawyers with the facilities they need to carry out their duties and must allow them to examine the case documents and be present during the investigation. Lawyers’ requests, furthermore, may not be refused without a legal justification. Additionally, the Charter of the Saudi Bar Association contains provisions to support the role of lawyers in promoting and protecting human rights.

In response to the request concerning rules and procedures to ensure that families, lawyers or any other person with a legitimate interest are informed immediately and precisely as to the whereabouts of persons deprived of their liberty

62. Anyone who has been arrested and detained may communicate with a person of their choice to inform them of the situation, in accordance with article 36 (1) of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: “Persons who are detained shall be treated in a manner conducive to the preservation of their dignity and shall not be harmed physically or mentally. They shall be informed of the reasons for their detention and shall have the right to contact anyone whom they wish to notify them of their detention.” Article 116 of the Code states: “Persons arrested or detained are to be informed immediately of the reasons for their arrest or detention and they have the right to communicate with a person of their choice. This shall take place under the supervision of a law enforcement official.” Moreover, following arrest or detention, accused persons are made aware of their right to communicate with an individual of their choice, pursuant to article 22 of the implementing regulation to the Code of Criminal Procedure, as indicated in the reply to No. 3 above.

In response to the request concerning safeguards to prevent torture and other forms of ill-treatment against persons deprived of their liberty, and how personnel of national security agencies are trained in article 6 (3) of the Declaration

63. The laws of Saudi Arabia prohibit and punish torture and contain a series of guarantees and measures aimed at ensuring that no detainee or prisoner is subjected to torture, ill-treatment or other cruel, inhuman or degrading treatment. Article 2 of the Code of Criminal Procedure stipulates that no person may be arrested, searched, detained or imprisoned except where provided for by law, and that a person may be detained or imprisoned only in a location designated for such purposes and for the period prescribed by the competent authority. Moreover, arrested persons may not be subjected to physical or mental harm or to torture or ill- or degrading treatment. Article 36 of the Code also requires that arrested persons be treated in a manner that preserves their dignity and that they should not be subjected to physical or mental harm. Under article 102 of the Code, the interrogation of accused persons is to be conducted in a manner that does not influence their will to make statements. They must not be required to take an oath or be subjected to coercive measures. Nor may they be interrogated outside the premises of the investigating authority unless the investigator deems such action to be necessary.

64. Under article 118 of the Internal Security Forces Act, the offences provided for in Royal Decree No. 43 are prohibited for officers, non-commissioned officers and personnel, and entail an investigation, a disciplinary court-martial and a criminal trial. Article 28 of the Prison and Detention Act prohibits the use of violence of any kind against prisoners or detainees and envisages disciplinary measures against civilian or military officials who perpetrate such acts, without prejudice to any criminal penalty they may also incur. Pursuant to article 2 (8) of Royal Decree No. 43 of A.H. 1377 (A.D. 1958), public officials who, in the course of their duties, inflict ill-treatment or use coercion such as torture, cruelty, confiscation of property or denial of personal liberties – including exemplary punishment, imposition of fines, imprisonment, exile or mandatory residence in a certain place and illegal entry into private dwellings – face imprisonment for up to 10 years.

65. Saudi Arabia remains bound by the human rights treaties to which it is a party, including the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which are considered to be part of domestic law.

66. Members of the Public Prosecution Service supervise the conduct of law enforcement officers pursuant to article 25 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: “Law

enforcement officials – in the discharge of their law enforcement duties as envisaged in the present Act – are under the supervision of the Public Prosecution Service. The Service may ask the competent authority to look into cases involving persons responsible for violations or shortcomings in the discharge of their duties, and it may request that disciplinary proceedings be launched, without prejudice to the right also to bring criminal charges.” Thus, all the actions of law enforcement officials are monitored and supervised by the Public Prosecution Service. This is to prevent any violation of the rights, safeguards and rules enshrined in law in general and in the Code of Criminal Procedure in particular, and to hold to account persons responsible for violating such provisions. Anyone may, without legal retribution, refuse to obey orders or instructions that are at variance with the law. Provisions that conflict with Islamic sharia, or with statutory laws deriving from Islamic sharia, are considered null and void, in accordance with article 187 of the Code, which reads: “Any action that is inconsistent with the provisions of Islamic sharia and the legislation derived therefrom shall be deemed null and void.” Law enforcement officials are given specialized training courses on the application of the law while, for its part, the Human Rights Commission organizes courses, lectures, seminars and workshops to give human rights workers (governmental and non-governmental) the technical skills necessary to enable them to carry out their duties, on the basis of international human rights standards and in the light of the provisions of Islamic sharia.

In response to the question regarding how the Government ensures that anyone with knowledge or a legitimate interest who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance has the right to complain to a competent and independent authority. What guarantees exist to ensure that complaints are investigated by the authorities promptly, thoroughly and impartially? What measures are taken to protect complainants from reprisals?

67. Saudi domestic laws provide protection for informants and witnesses in criminal cases, including cases of enforced disappearance. People are encouraged to denounce such crimes and reports are dealt with seriously even when made anonymously. Under the provisions of article 27 of the Code of Criminal Procedure, law enforcement officials are required to accept all reports and complaints they receive. The article reads: “Law enforcement officials, each within their jurisdiction, are required to accept all reports and complaints they may receive regarding offences. They – and the subordinates under their supervision – are to examine those reports and complaints, gather relevant information to be noted in records that they are required to sign, summarize and date that information in a register held for that purpose and promptly notify the Public Prosecution Service. Law enforcement officials are required, moreover, to go to the scene of an incident, secure the area, take possession of any items that may have a bearing upon the offence, safeguard evidence and take such measures as the situation might require. All the measures taken in that regard are to be noted in a special register which is to be signed by the law enforcement officials and his assistants.” Under article 40 of the Code of Criminal Procedure, anyone who is aware that a prisoner or detainee is being held unlawfully, or in a place not intended for imprisonment or detention, is required to notify the Public Prosecution Service. The article states: “Anyone who knows that a person is being imprisoned or detained unlawfully, or in a place not intended for imprisonment or detention, must notify the Public Prosecution Service. The competent official from the Service must go immediately to the place where the prisoner or detainee is located, conduct an investigation and order the person’s release if he is being unlawfully imprisoned or detained. The official shall write a report to that effect for submission to the competent authority so that it may launch legal proceedings against the persons responsible.” Reports of a prisoner or detainee being held unlawfully, or in a place not intended for imprisonment or detention, are to be accepted even if the party making the report has no legitimate interest in the matter. The competent official from the Public Prosecution Service then goes to the place in question and takes the necessary steps, as per article 27 of the implementing regulation to the Code of Criminal Procedure, which reads: “(a) Oral or written reports concerning a prisoner or detainee being held unlawfully, or in a place not intended for imprisonment or detention, are to be accepted under article 40 of the Code, even if the party making the report has no legitimate interest in the matter. A record is to be drawn up that contains the personal information of the party making the report and the contents of the report itself; (b) The head of the branch or of the competent department is to

inform the Public Prosecution Service of the existence of a prisoner or detainee being held unlawfully, or in a place not intended for imprisonment or detention. The party thus informed must immediately assign an official from the Service to go to the place where the prisoner or detainee is located and take the measures required under article 40 of the Code.” Investigators may conceal the identity of a witness if they believe that the interests of the investigation or of the witness himself so require. This possibility is enshrined in article 69 (3) of the implementing regulation, which stipulates: “Investigators may conceal the identity of a witness and not confront the witness with the parties to the case or with other witnesses, if they believe that the interests of the investigation or of the witness himself so require.” Anyone who seeks to intimidate or interfere with a witness is liable to be imprisoned for up to 24 hours, by order of the courts. Such an order is definitive, in accordance with article 119 of the implementing regulation, which reads: “Persons who are at the origin of any attempt to intimidate or interfere with witnesses while they are making their testimony shall be dealt with in accordance with article 142 of the Code and article 100 of the implementing regulation.” For their part, the courts protect witnesses against any attempted intimidation or interference in accordance with article 168 of the Code of Criminal Procedure, which stipulates: “Testimony shall be given at the court session, and each witness shall be heard separately. Where necessary, witnesses may be kept apart or confronted with each other. The court shall refuse to raise any question that is intended to influence the witness, or any leading question. The court shall not permit the raising of indecent questions unless they relate to material facts conducive to a ruling in the case. The court shall protect witnesses against any attempt to intimidate or confuse them during the delivery of testimony.” The Public Prosecution Service supervises and oversees prisons, detention centres and any other location in which criminal sentences are enforced. It receives complaints from prisoners and detainees, takes steps to secure the release of persons imprisoned or detained without legitimate reason, and launches legal proceedings against the persons responsible, as explained under No. 2 above. As article 68 of the Code of Criminal Procedure makes clear, such complaints are not to be disclosed: “The proceedings of the investigation and its outcomes are considered to be confidential and must not be disclosed, either by investigators or by their assistants, such as clerks, experts or others who, by virtue of their professional duties, are associated with the investigation. Persons who violate this provision will be held liable.” The party making the report may choose whether or not to disclose his own name. The misuse or abuse of authority on the part of public servants is prohibited under article 12 (a) and (b) of the Civil Service Act, which stipulates: “Public servants are prohibited from misusing their professional mandate or abusing their authority.” Moreover, the duties of public law enforcement officials (civilian and military) are enshrined in the laws that govern and regulate their functions. These include Royal Decree No. 43 – which criminalizes ill-treatment or coercion, such as torture, cruelty, confiscation of property or denial of personal liberties, in the course of discharging public duties – as well as other laws. Internal instructions and directives rest on the assumption that these laws are an integral part of the duties of public officials, who must abide by such laws and, if they fail to do so, face both criminal and disciplinary action. They cannot evade that responsibility and any transgression of powers or misuse of authority is investigated and punished.

In response to the question regarding which State authority is responsible for receiving and investigating such complaints and whether that authority is able to access all places where persons deprived of their liberty are being held and each part of those places, as well as any place in which there are grounds to believe that such persons may be found

68. The Public Prosecution Service, which exercises its functions with complete independence, supervises, oversees and inspects prisons, detention centres and any other location in which criminal sentences are enforced, as explained in Nos. 2 and 6 above. In fact, article 38 of the Code of Criminal Procedure states: “Competent members of the Public Prosecution Service shall, at any time and without regard to official hours, visit prisons and detention centres within their jurisdictional areas to ascertain that no one is being unlawfully imprisoned or detained. They shall examine the records of such prisons and detention centres, have access to prisoners and detainees, hear their complaints and accept any submissions they make in that connection. The wardens of prisons and detention centres shall provide the members of the Public Prosecution Service with everything they need to perform their

duties.” According to article 39 of the Code: “Prisoners and detainees have the right to submit, at any time, a written or verbal complaint to the warden of the prison or detention centre and request that it be conveyed to a member of the Public Prosecution Service. The warden must accept the complaint and forward it at once, after recording it in a special register. The prisoner or detainee must receive acknowledgement of receipt. The administration of the prison or detention centre is required to allocate a separate office for members of the Public Prosecution Service from which they can monitor the conditions of prisoners and detainees.”

69. Moreover, as explained under No. 2 above, the Human Rights Commission can visit prisons and detention centres at any time and without official permission. It receives human rights-related complaints and verifies any potential violations that might have occurred, which it refers to the competent authorities for them to take the necessary legal measures. For its part, the National Society for Human Rights, which is a civil society association, also visits prisons and detention facilities, interviews inmates and detainees, receives complaints, monitors any violations that might have occurred and follows up with the competent authorities. Moreover, offices have been allocated inside prisons for the Public Prosecution Service, the Human Rights Commission and the National Society for Human Rights. This helps to facilitate the exercise of their oversight mandate, which includes receiving complaints from prisoners and detainees, ascertaining their veracity and addressing them promptly and directly.

In response to the question regarding the means available to ensure access to effective legal remedies for victims of enforced disappearance, including the families of disappeared persons

70. Under the Basic Law of Governance, all persons have the right to seek legal redress on an equal footing and without discrimination. Article 47 of the Basic Law states: “All citizens and residents of the Kingdom of Saudi Arabia have an equal right to take legal action.” Any victim, or that victim’s heirs, can always bring private criminal case, in accordance with article 16 of the Code of Criminal Procedure, which reads: “The victim or his representatives or heirs may initiate a criminal action in respect of all cases involving a private right of action and pursue such proceedings before the competent court; in such circumstances, the court must summon the public prosecutor to attend.” Any person who has suffered harm as the consequence of a crime, or that person’s heirs, may pursue private action even if the request in that regard was not accepted during the investigation. This is enshrined in article 147 of the Code, which reads: “Any person – or his heirs – who has suffered detriment as a result of an offence shall be entitled to pursue a private action before the court that is hearing the criminal case, at any stage of the proceedings, even if the request was not deemed admissible during the investigation.” If the person who has suffered harm as the consequence of a crime does not have legal capacity and has no legal or testamentary guardian, the courts must appoint a guardian to pursue that person’s private action. This is set forth in article 148 of the Code, which stipulates: “If the victim of an offence has neither legal capacity nor a legal or testamentary guardian, the court before which the criminal case is being brought shall appoint a representative to pursue the victim’s private action.” Article 17 of the Code reads: “In cases where a private right of action is envisaged, no criminal proceedings or investigation may be initiated other than on the basis of a complaint filed by the victim or his representatives or heirs, unless the Public Prosecution Service considers it to be in the public interest to institute proceedings and investigate those offences.”

Annex IV

Press releases and statements

1. On 5 October 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on the UK Parliament to reject a government bill they say would give British soldiers advance immunity for war crimes and crimes against humanity.¹
2. On 12 October 2020, the Working Group, together with other special procedure mandates, issued a press release calling for the end to detention and intimidation of peaceful protesters.
3. On 27 November 2020, the Working Group, together with other special procedure mandates, issued a press release calling for the release of Egyptian human rights defenders jailed after meeting diplomats.
4. On 30 November 2020, the Working Group, together with other special procedure mandates, issued a press release calling on governments around the world to do more to prevent slavery and exploitation during the COVID-19 pandemic.
5. On 7 December 2020, the Working Group, together with other special procedure mandates, issued a press release indicating that the decision to release on bail three senior staff from the Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) was a positive first step.
6. On 9 December 2020, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on the Pakistan to uphold its human rights obligations by initiating prompt, thorough and impartial investigations into acts of enforced disappearances and torture, in particular concerning the incommunicado detention of human rights defender Idris Khattak.
7. On 16 December 2020, the Working Group endorsed a press release issued by the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, expressing dismay at the treatment of human rights defenders and lawyers in China, as they continue to be charged, detained, disappeared and tortured five years after the start of a crackdown on the profession under the guise of national security concerns.²
8. On 18 January 2021, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release condemning the violent events at the US Capitol in Washington and calling on the United States of America to de-escalate tensions and unify the country in full respect for democracy and the rule of law.
9. On 1 February 2021, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on Russia to ensure historian and human rights defender Yuri Alexeevich Dmitriev has a fair trial amid concerns the proceedings against him are politically motivated after a court ordered he stop using his own lawyer and engage a state appointed counsel.³
10. On 1 February 2021, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on Azerbaijan and Armenia to promptly release prisoners of war and other captives from the recent Nagorno-Karabakh conflict, and to return bodies to families for burial with due respect for cultural customs.⁴
11. On 4 February 2021, the Working Group together with other special procedure mechanisms, issued a press release calling on Iran to stop the execution of Baloch minority prisoners condemning the hanging of Javid Dehghan, an Iranian from the Baloch minority, on 30 January 2021.

¹ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26342&LangID=E>.

² <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26612&LangID=E>.

³ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26703&LangID=E>.

⁴ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26702&LangID=E>.

12. On 5 February 2021, the Working Group, together with other special procedure mechanisms, issued a press release urging the Sri Lankan authorities to stop rolling back hard fought progress made on rebuilding democratic institutions, and to press for accountability for past crimes and deliver justice for victims and promote reconciliation between communities.⁵

⁵ <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26725&LangID=E>.

Annex V

Other activities

1. On 1 October 2020, Bernard Duhaime and Luciano Hazan participated in an event at the University of the País Vasco (Spain) in commemoration of the 40th anniversary of the Working Group.
 2. On 28 October 2020, Luciano Hazan held a meeting with the Ministry of Justice and Human Rights in Chile, to discuss the mandate of the Working Group.
 3. On 27 October 2020, Luciano Hazan participated in an event organized by the International Commission of Jurist and the Human Rights Joint Platform, with a presentation on enforced disappearances in Turkey.
 4. On 20 November 2020, Luciano Hazan participated in a meeting entitled “*The right to search for the disappeared*”, with the participation of national search units of Mexico, Colombia, El Salvador and Peru, and with representatives of the Committee on Enforced Disappearances and the Interamerican Commission on Human Rights.
 5. On 10 December 2020, Luciano Hazan presented the Working Group’s thematic report on Standards and public policies for an effective investigation of enforced disappearances, in a meeting with the *Movimiento por nuestros desaparecidos* in Mexico.
-